



REPÚBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

**15<sup>a</sup>** REUNIÓN – SESIÓN ESPECIAL  
26 DE ABRIL DE 2000

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, licenciado CARLOS A. ÁLVAREZ,  
y del señor presidente provisional del Honorable Senado, doctor JOSÉ GENOUD

Secretarios:

Señor MARIO L. PONTAQUARTO, doctor RICARDO MITRE y señor JUAN C. OYARZÚN

Prosecretarios:

Señor ALEJANDRO L. COLOMBO, doctora VILMA IBARRA y señor RODOLFO BERNARDINI



## PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.  
 ALASINO, Augusto  
 ALTUNA, Juan C.  
 ANGELOZ, Eduardo C.  
 ARNOLD, Eduardo A.  
 BAUM, Daniel  
 BAUZÁ, Eduardo  
 BRANDA, Ricardo A.  
 CABANA, Fernando V.  
 CAFIERO, Antonio F.  
 CANTARERO, Emilio Marcelo  
 CARBONELL, José F. Francisco  
 CORACH, Carlos Vladimiro  
 COSTANZO, Remo J.  
 DE LA ROSA, Carlos L.  
 DEL PIERO, Pedro  
 GAGLIARDI, Edgardo  
 GALVÁN, Raúl A.  
 GARCÍA ARECHA, José M.  
 GENOUD, José  
 GIOJA, José L.  
 HUMADA, Julio C.  
 LEÓN, Luis A.  
 LÓPEZ, Alcides H.  
 LOSADA, Mario A.  
 MAGLIETTI, Alberto R.  
 MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique J. M.  
 MASSACCESI, Horacio  
 MASSAT, Jorge  
 MAYA, Héctor M.  
 MELGAREJO, Juan Ignacio  
 MENEGHINI, Javier R.  
 MENEM, Eduardo  
 MIKKELSEN-LÖTH, Jorge F.  
 MOLINARI ROMERO, Luis A. R.  
 MOREAU, Leopoldo R. G.

ORTEGA, Ramón B.  
 OUDÍN, Ernesto  
 PALACIOS, Gerardo L.  
 PARDO, Angel F.  
 PRETO, Ruggero  
 PRUYAS, Tomás R.  
 RAIJER, Beatriz I.  
 RODRÍGUEZ, Manuel A.  
 RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto  
 ROMERO, Marcelo J.  
 ROMERO FERIS, José A.  
 ROSTAN, Néstor D.  
 SÁEZ, José María  
 SALA, Osvaldo R.  
 SALUM, Humberto E.  
 SAN MILLÁN, Julio A.  
 SAPAG, Silvia E.  
 SERGNESE, Carlos J. A.  
 TELL, Alberto Máximo  
 ULLOA, Roberto Augusto  
 VAQUIR, Omar M.  
 VARIZAT, Daniel A.  
 VERNA, Carlos Alberto  
 VILLARROEL, Pedro G.  
 VILLAYERDE, Jorge A.  
 YOMA, Jorge R.  
 ZALAZAR, Horacio Aníbal

## AUSENTES, CON AVISO:

BRAVO, Leopoldo  
 SAGER, Hugo Abel  
 SAPAG, Felipe R.  
 USANDIZAGA, Horacio Daniel

## POR ENFERMEDAD:

DI PIETRO, Arturo R.

## SUMARIO

## 5. Apéndice:

Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 1863.)

— En Buenos Aires, a las 17 y 52 del miércoles 26 de abril de 2000:

**Sr. Presidente.** — La sesión está abierta.

1

## IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

**Sr. Presidente.** — Invito al señor senador por Formosa doctor Ricardo A. Branda a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.

— Puestos de pie los presentes, el señor senador Branda procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

1. **Izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto.** (Pág. 1802.)
2. **Lectura de la nota** presentada por varios señores senadores por la que se solicita se cite a esta sesión especial y del decreto dictado por la Presidencia. (Pág. 1803.)
3. **Consideración sobre tablas del dictamen** de las comisiones de Economía, de Trabajo y Previsión Social, de Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda en dos proyectos de ley: uno del señor senador Massat y el otro del señor senador Verna, referidos a la creación de puestos de trabajo temporarios (S.-100 y 583/2000.) Se aprueba. (Pág. 1803.)
4. **Consideración sobre tablas del dictamen** de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley en revisión sobre reforma laboral (C.D.-179/99.) Se aprueba. (Pág. 1813.)

## 2

## CITACION A SESION ESPECIAL

**Sr. Presidente.** – Se incorporarán en el Diario de Sesiones la nota presentada por varios señores senadores por la que se solicita se cite a esta sesión especial y el decreto dictado por la Presidencia.

Buenos Aires, 26 de abril de 2000.

*Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado don Carlos A. Alvarez.*

Tenemos el agrado de dirigimos a usted, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, a fin de solicitarle se sirva disponer la citación a sesión pública especial para el día de la fecha, a las 14 horas, a fin de tratar el siguiente plan de labor:

–Consideración del Orden del Día N° 221.

–Consideración del proyecto de ley en revisión sobre reforma laboral (expediente C.D.-179/99).

Saludamos a usted muy atentamente.

*Raúl Galván. – Pedro Del Piero. – Luis A. León. – José Genoud. – Roberto A. Ulloa. – Remo J. Costanzo.*

Buenos Aires, 26 de abril de 2000.

VISTO:

La solicitud formulada por varios señores senadores para que se convoque a sesión pública especial, a fin de considerar distintos temas pendientes de tratamiento, y

CONSIDERANDO:

Que dicho pedido se encuadra en las disposiciones reglamentarias en vigencia,

POR ELLO:

*El presidente del Honorable Senado de la Nación*

Artículo 1° – Por Secretaría cítese a los señores senadores a sesión pública especial para el día de la fecha, a las 14 horas, con el objeto de tratar el siguiente plan de labor:

–Orden del Día N° 221.

–Proyecto de ley en revisión sobre reforma laboral (expediente C.D.-179/99).

Art. 2° – Dése cuenta oportunamente al Honorable Senado.

Art. 3° – Comuníquese.

*CARLOS A. ALVAREZ.  
Mario L. Pontaquarto.*

## 3

## PROGRAMAS TRABAJAR

**Sr. Presidente.** – Corresponde ahora considerar el tratamiento sobre tablas del Orden del Día N° 221.

**Sr. Massat.** – Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** – Senador Massat.

**Sr. Massat.** – Señor presidente: esta iniciativa tiene que ver con la necesidad de recuperar programas que estaban vigentes y en ejecución hasta el año '99.

La profunda reforma del Estado que se llevó adelante en la Argentina, más dificultades económicas de orden internacional han dado como resultado en el país un altísimo índice de desocupación. Miles y miles de argentinos viven hoy sin un puesto de trabajo.

Decía yo que hasta el año '99 teníamos vigentes programas denominados Trabajar, que eran programas de empleos temporales con plazos fijos y utilizados fundamentalmente para servicios y obras públicas a través de gobiernos provinciales y municipales. Cuando se aprobó el proyecto de presupuesto del año 2000, las partidas previstas para este tipo de programas fueron reducidas sustancialmente. Estamos finalizando el mes de abril del corriente año y nos encontramos en la Argentina –y fundamentalmente en el interior del país– con que aquella desocupación que estaba en el 12,5 por ciento hoy está rondando el 14 por ciento, y en muchas regiones del país, como en algunos lugares de la provincia de Santa Fe, llega hasta el 16 por ciento.

El trabajo, señor presidente, es lo más digno que puede tener el ser humano; es lo que permite a una persona lograr el sustento para su familia y proyectar el futuro de sus hijos y la solidez social.

Cada uno de nosotros aspiramos a que en la Argentina los empleos que se generen sean genuinos. Y digo genuinos en tanto tengan que ver con la radicación industrial, con el desarrollo agropecuario, con el desarrollo económico. Debemos trabajar para ello. Debemos generar condiciones impositivas y de créditos, programas y políticas de gobierno para que en la Argentina podamos en algún momento tener pleno empleo. Pero mientras vamos pensando y ejecutando distintas medidas tenemos que pensar en la estabilidad social y en la seguridad social, que requerimos como imprescindible para construir esta Argentina de mediano plazo.

Tal vez pueda plantear el ejemplo de mi Santa Fe, una de las provincias más importantes en la Argentina en el orden productivo. Necesitamos que sectores que hoy están demandando y

**Sr. Verna.** – En ese caso, hay que cambiar “organismos estatales provinciales” por...

–Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Verna.** – Está bien: “...organismos estatales provinciales, organismos municipales...”.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Presidente.** – ¿Tiene el texto definitivo?

**Sr. Verna.** – Sí. Tenemos el texto definitivo: “...estará a cargo de organismos estatales provinciales, gobiernos y administraciones municipales o comunales, entidades civiles...”, y el resto sigue como está.

**Sr. Presidente.** – ¡Qué importante es la presencia de Alasino...!

**Sr. Verna.** – Es que se trata de un buen constitucionalista.

**Sr. Presidente.** – Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º con su nueva redacción.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** – Queda aprobado.

Tiene la palabra el senador por Salta.

**Sr. San Millán.** – Al haberse aprobado esta redacción del artículo 5º, no hay necesidad de mantener el artículo 10 del dictamen porque habla de la evaluación y aprobación de los proyectos.

**Sr. Presidente.** – Así es, señor senador; se puede suprimir ese artículo directamente.

En consideración la supresión del artículo 10.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** – Queda suprimido el artículo 10 y sancionado el proyecto de ley.<sup>1</sup> Pasa a la Honorable Cámara de Diputados.

#### 4

#### REFORMA LABORAL

**Sr. Presidente.** – Corresponde votar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley en revisión sobre reforma laboral, contenido en el expediente C.D.-179/99.

**Sr. Secretario** (Pontaquarto). – La Secretaría informa que ha ingresado dictamen sobre este proyecto.

**Sr. Presidente.** – En consideración el tratamiento sobre tablas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Maya.** – Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Maya.** – Señor presidente: antes de la votación del proyecto, como mínimo quisiera tener el dictamen porque realmente me parece imposible abordar esta cuestión sin conocerlo en forma concreta.

Me han llegado dos fotocopias: una que dice “A” y otra que dice “PJ”, y no sé cuál es el dictamen o si los dos textos son iguales. Digo esto a los efectos de poder tomar un conocimiento básico de la cuestión.

**Sr. Presidente.** – El jefe de su bancada se lo va a aclarar.

**Sr. Maya.** – Yo no tengo jefe de bancada; será un compañero...

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Alasino.

**Sr. Alasino.** – Señor presidente: lo que realmente vale es lo que está en poder del señor secretario parlamentario. Entonces, propongo que se saquen las fotocopias que hagan falta y se repartan a quienes corresponda.

**Sr. Presidente.** – Se tenía entendido que todos habían participado de la discusión del dictamen en el seno del bloque...

Ha sido votado el tratamiento sobre tablas del proyecto.

–El texto del dictamen es el siguiente:

*Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social, ha considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-179/99), sobre Reforma Laboral; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

#### PROYECTO DE LEY

#### TÍTULO I

#### Estímulo al empleo estable. Período de prueba

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 25.013, que modifica el artículo 92 bis del Régimen

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

de sanciones pecuniarias a la infracción de la normativa laboral, sea por imperio de la ley 18.694 o de la ley 25.212, al fortalecimiento profesionalización y mejora del servicio a la inspección del trabajo, incluido lo atinente a higiene y seguridad del trabajo.

Inclúyase en la finalidad antedicha la celebración y ejecución de convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para alcanzar los objetivos descriptos en el párrafo anterior.

A partir del año 2004, el Poder Ejecutivo podrá reducir la cuantía de la afectación dispuesta en este artículo, si se comprobara que los objetivos están prudencialmente alcanzados.

Invítase a las provincias a dictar normas similares a la precedente, en sus respectivas jurisdicciones.

#### TITULO VII

### Simplificación registral

Art. 32. – Institúyese en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, una unidad de ejecución del proceso de simplificación y unificación en materia de inscripción laboral y de la seguridad social, con el objeto de que el registro de empleadores y trabajadores se cumpla en un solo acto y a través de un único trámite. Además constituirá y mantendrá actualizado el padrón de empleadores y trabajadores con sus grupos familiares incluidos, y la información sobre el desarrollo de las relaciones laborales. Asimismo satisfará las necesidades de información de los organismos públicos y privados del sistema de seguridad social, de la inspección del trabajo, de las organizaciones sindicales y de los entes de control.

El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 180 días para poner en funcionamiento el sistema a cuyos efectos deberá observar las disposiciones de los artículos 18 y 19 de la ley 24.013, en lo que sea pertinente.

#### TITULO VIII

### Disposiciones finales

Art. 33. – En los casos que en razón de un conflicto de trabajo, las partes decidieran la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, éstas deberán garantizar la prestación de servicios mínimos que impidan su interrupción.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos estará facultado para disponer intimatoriamente la fijación de servicios mínimos que deben mantenerse en cada establecimiento o empresa cuando las partes hubiesen agotado la instancia tendiente al cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior sin acuerdo en tal sentido.

A falta de acatamiento de lo acordado previamente entre las partes o de la determinación que efectúe el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, éste procederá a instrumentar los

procedimientos de los incisos 2 y 3 del artículo 56 de la ley 23.551.

Sera de aplicación la ley 14.786 a los fines de encauzar el conflicto y propender a su resolución.

Las facultades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos deberán ejercerse conforme las normas y resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo.

Art. 34. – Deróganse los artículos 11, 18 y 20 de la ley 14.250 (t.o. decreto 108/88), 12, 14, 15 y 16 de la ley 25.013, el inciso *e)* del artículo 2º del anexo 1 de la ley 25.212, las leyes 16.936, 18.608, 18.692, 20.638, los decretos 2.184/90, 470/93 y toda otra norma que se oponga a la presente ley.

Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De conformidad al artículo 123 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

**Sr. Presidente.** – En consideración en general.

Luego de votar, se hará constar el número resultante.

– Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Presidente.** – Ya fue votado el tratamiento sobre tablas.

**Sr. Rodríguez Saá.** – Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** – Señor presidente: si ya fue votado el tratamiento sobre tablas, corresponde ponerlo en consideración y supongo que habrá un miembro informante que nos dirá qué vamos a votar ya que no tenemos el proyecto sobre las bancas.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Alasino.** – Señor presidente: para evitar estos malos entendidos, propongo que se saquen fotocopias, se repartan y luego comencemos con la discusión mediante el informe del señor presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

**Sr. Presidente.** – Así se hará, señor senador.

Mientras tanto, la Presidencia propone que haga su exposición el señor miembro informante de la bancada justicialista.

Tiene la palabra el señor senador Tell.

**Sr. Tell.** – Señor presidente: este honorable cuerpo se apresta a dar tratamiento al proyecto de reforma laboral, el cual fuera girado

oportunamente al Congreso de la Nación por parte del Poder Ejecutivo nacional.

La importancia y trascendencia del proyecto elevado impuso a este honorable cuerpo otorgarle un tratamiento acorde con la repercusión pública en cuestión.

En este contexto, y sin perder de vista las urgencias manifestadas por el Poder Ejecutivo, transformamos a este honorable cuerpo en un ámbito de reflexión y discusión sobre el proyecto en tratamiento.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, que presido en este Honorable Senado, invitó a su seno a lo largo de estos dos meses a actores económicos y sociales, incluso a aquellos que anunciaron un temprano rechazo a la norma, quienes intentaron vedarle a este honorable cuerpo la posibilidad de perfeccionarla.

Señor presidente: recogidas todas las opiniones de los actores interesados, nos abocamos al estudio del articulado del proyecto de ley, siendo nuestro primordial objetivo resguardar los derechos de los trabajadores ante un nuevo marco normativo de las negociaciones colectivas impuestas por este gobierno.

Este principal objetivo está cumplido.

Con relación al período de prueba, se ha reforzado la iniciativa del Poder Ejecutivo en cuanto a la reformulación del artículo sancionado en la Cámara de Diputados. En él se otorgan las garantías presupuestarias para asegurar importantes ventajas fiscales a los empleadores que efectivicen a trabajadores.

Por otra parte, este Senado ha incluido una protección adicional ante el fraude laboral que padecen muchos trabajadores, fraude que se consume ante la utilización fraudulenta de la figura de la cooperativa de trabajo, abuso que necesariamente debe tener fin en la Argentina.

Señor presidente: respecto de la negociación colectiva, este honorable cuerpo ha procurado resguardar los derechos de los trabajadores actualmente amparados por los convenios colectivos vigentes, de modo que la transición al nuevo régimen de negociación colectiva no abra las puertas a una degradación de las condiciones de trabajo y remunerativas de que gozan actualmente los trabajadores.

Asimismo, se han incorporado resguardos cuando la negociación colectiva es ejercida por un sindicato de ámbito menor, privilegiando la resolución de eventuales conflictos entre las

entidades sindicales de distinto grado en base a la voluntad estatutaria de las asociaciones profesionales. Ante la continuidad de las divergencias, se estimula su solución dentro del ámbito sindical, con exclusión de cualquier tipo de injerencia estatal.

A su vez, se ha aceptado la idea del arbitraje propuesta por el Poder Ejecutivo como modo de laudar ante la falta de acuerdo en la renovación de los convenios suscriptos en la década del 70, otorgando la primacía a la entidad sindical para solicitar el arbitraje, sin perjuicio de que ambas partes en conjunto puedan convenir la utilización de ese mecanismo.

En todo el articulado de este proyecto de ley se desprende la incentivación a la negociación colectiva, dejando la intervención estatal como última instancia ante la solicitud de las asociaciones profesionales y/o de ambas partes en conjunto.

En refuerzo a la estimulación de la negociación, este honorable cuerpo, a sabiendas de la responsabilidad de los trabajadores argentinos, ha estatuido un fuerte derecho a la información, derecho que no dudo será ejercido con corrección y responsabilidad y significará que la organización sindical tendrá que estar al lado de la empresa en la búsqueda de las soluciones a los problemas que ocasiona la reconversión productiva, alejando la posibilidad de que ésta siempre pase por la reducción de las dotaciones de personal.

En el caso de las grandes empresas se establece la obligación de realizar ante la organización sindical un balance social, mecanismo que ayudará a la integración y a la búsqueda en conjunto de esas soluciones.

Por otra parte, se le da un impulso esencial a la inspección del trabajo, creando las condiciones para que el Estado nacional inicie un decidido y eficaz combate al empleo no registrado. En este sentido, se profundizan los mecanismos de coordinación entre las distintas jurisdicciones provinciales y la Nación como forma de unir fuerzas en la erradicación del empleo en negro. La invitación a los gobiernos provinciales a adoptar normas comunes que regulen la inspección del trabajo es coherente con la ley 25.212, recientemente sancionada.

Señor presidente: en síntesis, este honorable cuerpo ha sido fiel a su historia de construir los consensos y el ámbito de diálogo, lo que ha sido permanente en los tiempos de la democracia.

Hemos escuchado a todos los actores socio-económicos del país y el producto de las consultas realizadas las hemos volcado en este articulado, arribando de esta manera a un dictamen que intenta contribuir a la resolución del grave problema del empleo estable y del empleo en negro en la Argentina.

No hemos podido contemplar los intereses de todos los sectores, pero esto es un avance. Lo hemos hecho desde la responsabilidad de nuestras funciones. Esto es imposible hoy, pero hemos realizado el máximo esfuerzo para dar el más elevado y desinteresado debate para la resolución de este problema.

Estoy confiado, señor presidente, en que los que hoy se oponen a esta ley sabrán reconocer en el futuro que, si bien seguramente podría haber sido mejor, fue óptima dentro de las circunstancias que rodearon su tratamiento.

En consecuencia, y para ir finalizando, señor presidente, invito a todos a no concluir este debate acá. El problema del empleo necesita de nuestra constante ocupación y de nuestra constante búsqueda de consenso.

**Sr. Presidente.** — Antes de dar la palabra al senador Alcides López, si los señores senadores están de acuerdo, leería la lista de los senadores anotados para hacer uso de la palabra: senadores López, Romero Feris, Rodríguez Saá, Del Piero, Varizat, Cafiero, Sergnese, Villaverde, Alasino y Maya.

**Sr. Galván.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Galván.

**Sr. Galván.** — Para una pertinente aclaración, señor presidente.

Nuestro bloque ha delegado en el senador por Entre Ríos vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, doctor Alcides López, la responsabilidad del debate de este proyecto. Como bien lo señalaba recién el señor senador por Jujuy, la virtud de esta norma que se va a sancionar está en la profunda coincidencia a que arribaron las expresiones políticas de esta Cámara. Por eso nosotros, en homenaje a eso, confiamos en el senador por Entre Ríos no solamente el criterio ideológico, si cabe la expresión, sino también todo lo que hace a la textura jurídica del presente proyecto de ley.

**Sr. Presidente.** — ¿Estamos de acuerdo en cerrar la lista de oradores?

**Sr. Menem.** — Que se haga la moción.

**Sr. León.** — Depende de lo que se diga, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Alcides López.

**Sr. López.** — Señor presidente: lo menos que podemos decir es que hoy sesionaremos contentos por dos cosas fundamentales. Una, porque la protesta contra esta ley se ha llevado a cabo hoy frente al Congreso se ha desarrollado con total normalidad. Es una satisfacción sesionar cuando no se ha producido ningún tipo de incidente y cuando en la democracia argentina se garantiza el derecho a protestar.

En segundo lugar, sentimos una profunda alegría por el hecho de haber coincidido y acordado los parámetros y las aperturas necesarias a efectos de que se produzcan mejoras que contribuyan a crear empleo estable en la Argentina. En este sentido, va mi reconocimiento al miembro informante, por la forma en que encará la presentación del tema, marcando el acuerdo, la coincidencia, la apertura y la responsabilidad con que se fueron recibiendo todas las opiniones de los distintos sectores, y a su bloque porque se había comprometido a brindar herramientas necesarias para cambiar las políticas en la Argentina y ha estampado sus firmas en el dictamen. Sé que algunos no coinciden. Debemos tener en cuenta que el problema del desempleo es profundo en la Argentina.

Hoy se manifestaron los trabajadores organizados, contenidos en las organizaciones sindicales. Los desocupados están esperando algunas normas que faciliten su integración al mercado de trabajo y esta iniciativa, fundamentalmente, tiende a satisfacer esa necesidad.

En octubre hubo un resultado eleccionario que obviamente estaba vinculado a políticas de cambio. La gente esperaba que algunas cosas pudiesen cambiar, porque no dieron resultado —para decirlo de alguna manera— las políticas de empleo que se habían elaborado durante los últimos diez años, lamentablemente, porque todos hubiéramos querido que el problema del desempleo no se profundizara en la Argentina al grado en que ocurrió.

Estas políticas, en cierta medida —aunque esto no es un instrumento milagroso ni mucho menos—, empiezan a plasmarse en algunas normas, y ésta es la primera que propone el gobierno de la Alianza.

Se ha mantenido la estructura básica del proyecto que elaboró el Poder Ejecutivo y que sancionó la Cámara de Diputados, pero se la ha mejorado profundamente —creo—, y se han incorporado importantes incentivos al empleo, que pueden ser de ayuda, juntamente con ese período de prueba, que difiere en su forma de lo que se planteó durante el gobierno anterior, esto es los contratos por tiempo determinado, los contratos temporales, que fueron denominados luego “contratos basura”. Es decir, el incentivo para que el empleador integre al trabajador en el plantel permanente de su empresa al concluir el período de prueba se produce, precisamente, al final. Durante ese período de prueba el empleador deberá pagar la totalidad de los aportes patronales; dicho período va a ser computado a los efectos de la antigüedad del trabajador y éste gozará durante ese lapso de asistencia por obra social y aportará al sistema previsional a efectos de su jubilación.

Además, al salir del período de prueba e incorporarse al empleo estable, el empleador va a recibir como premio, para el mantenimiento de ese puesto de trabajo, una reducción de un tercio de los aportes patronales. Esta modificación es importante.

Estamos de acuerdo en que se ha beneficiado el proyecto de ley con la modificación que incorporó la Cámara de Diputados en cuanto a la reducción del período de prueba de 6 a 3 meses. Nos resultaba realmente molesto a quienes hemos bregado muchas veces en las lides laborales, en el Parlamento y fuera de él, que el período de prueba fuera tan extenso, pero se lo ha mantenido para la pequeña empresa, porque es la primera que puede generar empleo en la medida en que haya reactivación. En ese caso, puede gozarse de un período de prueba de 6 meses y para los empleos calificados, de alta calificación, puede extenderse por convenio colectivo a 12 meses. Creo que esto también constituye un incentivo que se da a la pequeña y mediana empresa.

Hay otras normas, además, que hacen al fomento del empleo, que es necesario recalcar: el empleo de la madre, de la mujer jefa de familia, el empleo del trabajador desocupado mayor de 45 años, el empleo de los jóvenes, de los menores de 24 años. En estos casos el empleador tendrá una reducción en sus aportes para promocionar la incorporación de esas personas a

los planteles de la empresa, que será más importante que la reducción del período de prueba; me refiero a una rebaja que pueda alcanzar al 50 por ciento de los aportes patronales. Es un incentivo poderoso.

Además, se establece un subsidio para el empleador que ingrese trabajadores a su plantel permanente, por tiempo indeterminado, que administrará el Ministerio de Trabajo de la Nación. No sé cuál va a ser su valor pero, si tenemos en cuenta los salarios de la Argentina, cualquier importe que pueda manejar el Ministerio de Trabajo como subsidio beneficiará la promoción del empleo en nuestro país, seguramente.

También es cierto que tocamos ciertos temas que fueron materia de largas luchas por parte de quienes nos dedicamos a ellos: justicialistas, radicales, hombres de los partidos provinciales y del resto de los partidos políticos, que teníamos una visión social de los problemas. Me refiero, por ejemplo, a la posibilidad de regular y de inspeccionar a las cooperativas de trabajo que incursionan en el fraude laboral. Esta es una incorporación importante. Se trata de una cuestión en la que los trabajadores argentinos han sufrido las consecuencias del trabajo en negro en estas cooperativas, muchas veces por el fraude. Y no es que estemos en contra de las cooperativas de trabajo, que son beneficiosas, ponderables y auspiciosas cuando cumplen con las reglamentaciones vigentes, sino porque desgraciadamente han sido utilizadas en fraude del trabajo argentino. Invito a pensar esta cuestión a quienes van a manifestar su opinión en contra de este proyecto de ley.

Otra cosa muy importante que logró consenso unánime desde el principio —que cuando se propuso, se dijo: si estamos de acuerdo, vamos a incorporarlo— es el tema de la información, que ha rescatado el presidente de la comisión. Se trata del derecho a la información para discutir el convenio; el derecho a la información para cuando una empresa entra en un período de crisis y tiene que elaborar un convenio colectivo de crisis. El derecho se establece ya más genéricamente para aquellas empresas de más de 500 trabajadores y está expresado en un artículo especial de la ley bajo el epígrafe de “Balance social”. Aquellas empresas con más de 500 trabajadores tendrán que informar anualmente al gremio organizado, que es el que queremos privilegiar —siempre quisimos privilegiar



con estas normas al gremio con personería gremial—, cómo es la situación social de la empresa. Le va a costar muy poco a ella y va a satisfacer y servir para mejorar políticas sociales dentro de las empresas en la Argentina.

Entendimos siempre que esta ley no posibilitaba la rebaja salarial en la Argentina, por algunas razones. Porque la propia ley tenía dos garantías que ya estaban establecidas. La primera era que para salir del convenio ultraactivo se tenía que negociar en el mismo ámbito y nivel. Es decir que los mismos que habían firmado el convenio ultraactivo obviamente iban a firmar el convenio que venía, pero se necesitaban dos aportes para bajar los salarios. Por supuesto que los representantes gremiales no iban a bajar los salarios de los convenios ultraactivos, que además eran bajísimos, y que estaban en un piso que no toleraba de ninguna manera una baja en el salario.

Además existió otra garantía que no se utilizó en los últimos tiempos en la Argentina y que se sacó, como era la garantía de la homologación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Cuando el Ministerio homologa, controla la legitimidad del convenio con la norma vigente, pero también cómo afecta las condiciones sociales de la Argentina. Esto es fundamental, porque confío que los hombres del Ministerio de Trabajo de la Argentina no van a homologar en un convenio una baja salarial, pero fundamentalmente porque ni la realidad económica ni la realidad de los convenios vigentes lo permitían. Estábamos convencidos de que esto no se iba a producir y como estábamos convencidos lo dijimos con total honestidad: esta ley no produce rebaja de salarios en la Argentina. Pero cuando se instala el tema, cuando los senadores del justicialismo de la Nación incorporan a sus discursos este tema y lo plantean, no tuvimos problema en incorporarlo.

Podemos haber discutido los tecnicismos de la arquitectura legal de la ley, que es dificultosa, y llevó mucho tiempo llegar a una conclusión, pero estuvimos de acuerdo porque ni el Poder Ejecutivo ni seguramente los diputados de la Alianza, del oficialismo, que la votaron ni mucho menos los senadores de la Nación querían bajar los salarios de los argentinos.

Hoy tienen la garantía los trabajadores argentinos y por eso pudimos decir al mediodía que si venían a manifestar su disconformidad

frente al Congreso por el tema de la rebaja salarial, se podían desconcentrar tranquilos hacia sus casas porque no se afectarán los salarios de los argentinos que están sometidos a los convenios colectivos y porque vamos a facilitar políticas de empleo a los desocupados.

Con esta vieja filosofía de los partidos mayoritarios de la Argentina, en algún momento de la discusión se llegó a plasmar y a decir que mientras se mantengan estas estructuras partidarias en la Argentina, los derechos de los trabajadores están garantizados y es efectivamente así.

Con esta satisfacción venimos a decir a los senadores de la Nación que, sin temores, es necesario cambiar reglas de juego en materia de empleo para ver si logramos salir de la desocupación, es necesario cambiar reglas de juego en la Argentina en materia de negociación colectiva, para promocionarla.

La negociación colectiva es el método democrático que tienen las democracias modernas para discutir las condiciones salariales y las condiciones de trabajo en las empresas, adecuándolas a los sistemas de producción, que van cambiando vertiginosamente. Se trata entonces de promover la cultura de la negociación colectiva.

Con este convencimiento pedimos a los senadores de todos los partidos políticos que acompañen sin temor la sanción de este proyecto.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el senador Romero Feris.

**Sr. Romero Feris.** — Señor presidente, señores senadores: en primer lugar, quiero referirme a la trascendencia de este proyecto de ley de reforma laboral que viene de Diputados y que hoy estamos considerando. Pero a la vez, debo manifestar que estoy convencido de que ésta no es la mejor forma de legislar para que el Congreso argentino recupere credibilidad por parte de la opinión pública. Por ejemplo, no cuento en mi banca hasta este momento con el dictamen de la comisión, que hoy se ha expedido. Es decir que lamento no conocer en profundidad este tema...

—Se entrega el documento al señor senador.

**Sr. Romero Feris.** — Bueno, ahora me lo alcanzan pero no hay tiempo material para que me pueda expresar y analizar en profundidad la cuestión.

De todas maneras, creo que tenemos la obligación de analizar hechos de esta envergadura, de esta importancia y de esta magnitud con total responsabilidad, sin que esto signifique que no lo hayan hecho los miembros de la comisión respectiva. Pero acabo de recibir el dictamen y es muy tarde.

Quiero manifestar que voy a apoyar en general este proyecto, teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo le ha dado una trascendencia fundamental a esta reforma laboral y, además, que según el propio Poder Ejecutivo con esta iniciativa estaríamos buscando que descienda la tasa de desempleo. Recordemos que millones de argentinos hoy no tienen puestos de trabajo.

A mi criterio, no sé si se logrará el objetivo fijado y acerca del cual el Poder Ejecutivo manifestó que será logrado. De todas maneras, tengo algunas objeciones para hacer en particular, pero voy a votarlo afirmativamente en general.

En definitiva, teniendo en cuenta el escasísimo tiempo de que se disponía para poder evaluar, analizar y estudiar a fondo el dictamen que hoy ha elaborado la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Honorable Senado, voy a pedir la inserción del resto de las palabras que quería decir esta tarde en este recinto.

Pero repito: es necesario que ésta sea la última vez que nos aboquemos a tratar temas de tanta envergadura de esta manera.

El pueblo argentino desea que sus legisladores actúen con el tiempo y la profundidad necesarios en el estudio de los distintos problemas que aquejan a la gente.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente:

En el mes de noviembre de 1991 se sancionaba la ley 24.013, más conocida como "Ley de Empleo".

Se inauguraba así una etapa en cuanto a las características y orientación filosófica de la legislación laboral argentina.

Desde aquel momento y hasta el día de hoy, el criterio flexibilizador es el que se ha impuesto con cada norma propuesta y posteriormente sancionada, a las que invariablemente se les ha dado el genérico nombre de "reforma laboral".

Siento en este momento, señor presidente, la necesidad de compartir con usted y con los señores senadores una sensación que he experimentado

desde que este Honorable Senado ha encarado el tratamiento de este proyecto a través de las numerosas reuniones mantenidas con los diversos sectores interesados en el tema.

Y ella ha nacido además de la recopilación de antecedentes que he efectuado sobre las diversas normas que este Honorable Senado ha tenido la oportunidad de debatir en los últimos años.

No es una sensación agradable, lamentablemente. Porque veo, con preocupación, repetidas las circunstancias en las que se debate una reforma a las leyes que regulan el trabajo y la negociación colectiva en el país.

Considero que una vez más la coyuntura prevalece en el análisis de la cuestión.

Porque es indudable que no venimos aquí a debatir un plan nacional referido al empleo o a los lineamientos que orientarán una política integral acerca del trabajo y la productividad.

Estamos legislando para el momento, apremiados por los desalentadores índices de desempleo, subempleo, trabajo en negro y hasta sobreempleo, acuciados por la realidad que atraviesan millones de argentinos que no pueden acceder a un puesto de trabajo permanente, que les garantice cobertura de salud, previsional y la consecuente dignificación de su existencia.

Las implicancias sociales de esta lamentable lista de males no se agota con las carencias económicas que afrontan las familias y que se extienden a la economía en general, sino que además engendran desencuentros familiares, desesperanza, delincuencia y marginalidad entre otras que no valen ya mencionar por ser ampliamente conocidas.

Entonces, señor presidente, me pregunto si estamos transitando el camino correcto y, sinceramente, no estoy muy seguro de que lo sea.

Si revisamos las declaraciones vertidas en los diferentes medios de comunicación, los fundamentos de los proyectos, los comentarios que sobre ellos se han formulado así como los debates legislativos, en torno a las iniciativas tratadas y sancionadas en los últimos tiempos, también es posible encontrar lugares comunes.

Necesidad de adecuar la legislación del trabajo que había permanecido prácticamente inmutable en el tiempo; no menos urgente necesidad de adaptar las normas laborales a los nuevos métodos de trabajo y producción; imprescindible decisión para reducir los costos de permanencia y salida de la relación laboral; obligación de dar herramientas para que nuestra industria alcance estándares internacionalmente competitivos en cuanto a sus costos; urgente e impostergable necesidad de reducir los dramáticos índices de desocupación, subocupación y trabajo en negro.

Podría, señor presidente, seguir enumerando una larga lista de necesidades que encontrarían una respuesta, aunque sea en parte, mediante una modifi-

cación de las leyes que regulan la relación entre el capital y el trabajo.

Es así que hemos visto cómo recetas de todo tipo se incorporaron a nuestras leyes del trabajo.

Con la ley 24.013 llegaron los contratos promovidos, con reducción o eliminación de cargas sociales y reducción de los costos indemnizatorios.

Medidas contra el trabajo en negro y alentadoras de la inscripción de los trabajadores se sancionaron con esa norma.

También encontramos en ella reglas para la negociación colectiva y una ampulosa declaración de principios que, lamentablemente, solamente quedó en eso.

Luego sancionamos las leyes 24.467 y 24.465 que además de incorporar nuevas modalidades de contratación, pasantías y establecer normas especiales para la contratación de personal en la pequeña y mediana empresa previeron nuevas disposiciones referidas a la negociación colectiva.

Apareció en el campo del derecho colectivo la disponibilidad negocial que, a fuerza de ser sinceros, generó algunos convenios con un saludable equilibrio de intereses y muchos donde los trabajadores resignaron derechos y se plasmaron algunos abusos.

Mientras tanto, señor presidente, la realidad se encargó de echar por tierra los pronósticos más optimistas y las tesis mejor desarrolladas.

Es preciso entonces adoptar en esta difícil hora una actitud sensata, sincera y coherente.

Señor presidente, debemos admitir que desde hace casi diez años el gobierno nacional y este Parlamento hemos intentado denodadamente dar a la sociedad elementos que hicieran posible comenzar a devolverle a los millones de argentinos desempleados, subempleados o empleados en forma irregular, la dignidad que el hombre alcanza a través de su trabajo.

Y la verdad, señor presidente, es que no hemos encontrado aún la manera correcta de hacerlo.

No digo que fracasamos porque hemos intentado con nuestra mejor convicción y esfuerzo revertir la situación.

Hoy estamos en este Honorable Senado considerando una nueva reforma laboral.

Y me pregunto, señor presidente, si no son ya demasiadas reformas. Si es posible que sigamos llamando de esa manera a estas iniciativas.

Porque ciertamente los métodos elegidos para atacar el mismo problema son casi idénticos.

Me pregunto, señor presidente, si no estaremos nuevamente elucubrando con la mejor intención fórmulas legales que podemos entender como caminos hacia la solución del problema y sin embargo no estamos tomando en cuenta algunos datos que nuestra realidad nos pone delante todos los días.

No pretendo repetir a los señores senadores los preocupantes datos de nuestra economía.

Se ha dicho hasta el hartazgo que la recuperación es lenta.

Sabemos de los problemas estructurales que padece nuestro sistema económico, las dificultades que enfrentan los hombres de la producción para crear riquezas.

Sabemos sobradamente los altos costos de infraestructura, financiamiento e impositivo que deben afrontar.

Conocemos también que la gente restringe cada día hasta sus gastos más elementales, que se consume menos, que cada día se piensa más en vivir con lo mínimo e indispensable.

Entonces creo que es hora de tomar conciencia y analizar si no será que estamos poniendo el acento y la mirada exclusivamente en un dato de la realidad y se nos escapan otros.

Porque, señor presidente, es cierto que los empresarios necesitaban una adecuación de las normas laborales a los tiempos que corren y creo que la obtuvieron en gran medida.

El trabajo no es el mismo que hace 20 años, ni siquiera hace 10; los medios y los métodos de producción tampoco son los mismos; la tecnología ha seguido con su benéfico, pero implacable avance y ha dejado personas sin trabajo a su paso.

Creo que nadie duda hoy que aquella flexibilización era necesaria; la pregunta es cuál es el límite, cuándo dejamos de flexibilizar para directamente quebrar la relación de fuerzas.

Estoy seguro de que estamos en el límite.

Señor presidente, lamentablemente, el procedimiento seguido para la confección del dictamen me impide extenderme en consideraciones referidas al articulado en particular, no obstante lo cual expresaré algunas opiniones.

Señor presidente, no tengo dudas en afirmar que el período de prueba ha visto desvirtuada su finalidad y función.

En efecto, no hace falta explicar qué significa probar si una persona es hábil para desempeñar una determinada tarea.

Si es preciso explicar por qué esa prueba puede durar nada menos que seis meses o un año.

Es cierto que períodos como éstos han estado ya vigentes, pero ello nada predica acerca de su bondad, nadie nos obliga a repetir errores.

Detengámonos a pensar en el estado de incertidumbre y zozobra en que un padre de familia único sostén de ella puede padecer al saber que cualquier día de trabajo puede ser el último.

Ello es perfectamente posible según nuestra Ley de Contrato de Trabajo, porque nuestra legislación no prohíbe el despido, pero lo considera disvalioso.

Por ello existe la indemnización por despido sin causa justificada.

Esta regulación actúa entonces como un paliativo para el trabajador despedido y como una sanción para el empleador.

Es absolutamente razonable sostener que no puede obligarse al empleador a mantener en su puesto a

un empleado ineficiente o sin capacidad suficiente y por ello considero útil el período de prueba en tanto y en cuanto sólo sirva para precisamente probar.

Pero no tengo idéntica opinión cuando degenera una simple modalidad de contratación sin obligación indemnizatoria en caso de despido.

Y me temo que ello podría darse con la redacción dada al artículo 1º del proyecto.

Considero que podrían haberse imaginado algunas variantes que permitieran balancear los intereses en juego tal como algunos convenios colectivos lo hicieron en su momento.

Existen algunos que condicionan la aplicación del período de prueba a la inexistencia de deudas del empleador con organismos previsionales u obras sociales, fórmula ésta que contiene el beneficio de compeler al cumplimiento de las normas vigentes.

En otros casos se establecen indemnizaciones que crecen en su porcentaje a medida que el trabajador tiene mayor antigüedad aun en el período de prueba. De esa manera se estaría alentando la efectivización de los trabajadores.

Por otra parte, señor presidente, no podemos olvidar que los costos de despido son hoy muy inferiores a los que existían antes de la sanción de la ley 25.013 a la que oportunamente me opondré.

De tal suerte que aquella incertidumbre no se reduce exclusivamente al período de prueba.

Considero, señor presidente que, en algunos casos, la extensión actual del período de prueba puede resultar insuficiente.

Pero no es menos cierto que también puede ser excesiva en otros.

Se dispone en el artículo 1º del dictamen de comisión la posibilidad de que por medio de la negociación colectiva se disponga la extensión del período de prueba de 3 a 6 meses para las medianas y grandes empresas.

Y que ese máximo podría extenderse de igual manera a un año en el caso de las pequeñas empresas cuando se tratare de un trabajador calificado según el convenio.

No aprecio el porqué de la distinción. Cuál es la razón para condicionar la extensión en un caso y no hacerlo en otro.

De tal suerte que propongo se establezca para los dos casos de extensión del período de prueba idéntica condición, es decir, que se trate de un operario calificado.

En el párrafo 1º del artículo 1º, se establece que el uso abusivo del período de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones que establecen los regímenes sobre infracciones a leyes del trabajo.

En mi opinión, se debería castigar ese uso abusivo, además, con la pérdida de los beneficios que el mismo importa para el empleador en relación al trabajador que se encuentra ocupando el puesto de

trabajo en ese momento, es decir que le sea inoponible.

Señor presidente, considero que los mecanismos previstos para fomentar el empleo de los hombres mayores de 45 años, mujer jefa de hogar o joven de hasta 24 años son atendibles.

Pero no puedo dejar de recordar que sistemas similares ya han estado en vigencia y los resultados no han sido los esperados.

En cuanto al artículo 28 de la ley 14.250 que se incorpora por el presente proyecto en el que se pretende establecer una garantía para evitar la reducción de los ya de por sí deprimidos salarios de los trabajadores, considero que el mismo no constituye un reaseguro suficiente en la materia.

Albergo, señor presidente, el temor de que a pesar de ello se aseste un nuevo golpe al salario de los que menos tienen. Espero que al homologar los convenios colectivos que oportunamente se suscriban, la autoridad de aplicación intervenga en caso de que se produzcan abusos en este sentido.

Son a mi juicio positivas las normas incorporadas relativas al derecho de información que les asiste a los representantes sindicales acerca de la marcha de las empresas con el fin de que se encuentren con todos los elementos necesarios para ponderar adecuadamente la situación de la empresa o sector en que deba desarrollarse la negociación.

Espero, señor presidente, que esta regulación sea cumplida por las empresas y que el Estado vele por su debido cumplimiento.

Debemos tener presente que en los países más desarrollados el sector empresario se representa esta obligación como un deber de lealtad indiscutible y que redundará en una mejor comprensión por parte del sector trabajador de las situaciones particulares por las que aquéllas atraviesan.

Señor presidente, en un reciente estudio publicado en una revista especializada en derecho laboral leíamos que la República Argentina es uno de los países del mundo donde existe una mayor desproporción entre la cantidad de trabajadores y el número de inspectores de policía del trabajo.

Yo creo que este dato es toda una definición.

Estamos más empeñados en reformar leyes que en hacer que las mismas se cumplan.

El trabajo en negro; la casi esclavitud en la que muchos hermanos inmigrantes trabajan; el incumplimiento flagrante a las normas de seguridad e higiene; el bajísimo índice de horas extras liquidadas en debida forma; el cada vez más importante sobreempleo son fenómenos que no se resuelven con la sola vigencia de una ley.

Exigen que el Estado retome la función de control y sanción de las infracciones que prácticamente ha abandonado.

Espero, señor presidente, que las normas previstas en el título VI del proyecto contribuyan a revertir esta situación.

Es preciso, en definitiva, que el Estado nacional en forma conjunta con los estados provinciales adopten una política común de control y sanción de las infracciones a las normas laborales.

En este punto me permito recordar los objetivos que, según su artículo 2º, la ley de empleo 24.013 pretendía alcanzar, a saber: *a)* promover la creación del empleo productivo a través de acciones e instrumentos contenidos en las diferentes políticas del gobierno nacional, así como a través de programas y medidas específicas de fomento de empleo; *b)* prevenir y regular las repercusiones de los procesos de reconversión productiva y de reforma estructural sobre el empleo, sin perjuicio de salvaguardar los objetivos esenciales de dichos procesos; ...*d)* fomentar las oportunidades de empleo para los grupos que enfrentan mayores dificultades de inserción laboral; *e)* incorporar la formación profesional como componente básico de las políticas y programas de empleo;..."

Reflexionemos entonces si estos objetivos han sido plenamente alcanzados y si la norma propuesta contribuirá a hacerlo.

Señor presidente, oportunamente hice referencia a las graves dificultades económicas y sociales que hoy debe afrontar nuestro país.

Y es al actual gobierno nacional a quien le toca conducir sus destinos y encontrar las soluciones.

Ese gobierno es el que nos solicita con vehemencia la sanción de la iniciativa que hoy consideramos con la convicción de que será una herramienta idónea para, junto con otras, encontrar el camino que le permita a millones de argentinos recuperar la esperanza.

No obstante ello debo dejar expresada mi desaprobación para con la mecánica seguida para la elaboración del dictamen a considerar.

Comprendo que se trata de un tema evidentemente complejo y trascendente, pero por ello mismo es que no podemos repetir esta nefasta experiencia de no contar con el despacho de comisión con la debida antelación que nos permita estudiar seriamente sus términos.

Estoy seguro que los millones de argentinos a los que se aplicará esta ley merecen que la misma se analice con la profundidad y el tiempo necesario para adoptar una decisión de tal magnitud.

Señor presidente, consecuentemente del rol que nos toca desempeñar en este Honorable Senado que no es el de obstruir en forma obstinada la sanción de normas que no nos conforman plenamente, pero tampoco el de guardar silencio sobre nuestras prevenciones votaré afirmativamente en general el proyecto en cuestión.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Rodríguez Saá.** — Señor presidente: voy a expresar mi opinión y, en definitiva, a votar por el rechazo de este proyecto de ley en general y en particular.

Voy a dar fundamentos formales y sobre la cuestión de fondo.

Hubiera deseado que el miembro informante hiciera un cuadro analítico acerca de cuáles son las reformas a la sanción de la Cámara de Diputados que se han propuesto en este dictamen; cuáles son los temas que se han negociado, porque veo que los dos bloques mayoritarios están hablando de que hay un consenso sobre esta ley; cuáles son los consensos a los que se ha arribado y si ha habido diferencias con respecto a la sanción de la Cámara de Diputados o no.

Empecemos por las cuestiones formales. Por más que queramos elogiarnos por la labor parlamentaria que hemos tenido, voy a ser un poquito más duro. No sólo no voy a elogiar la metodología ni la forma en la que se ha tratado el proyecto, sino que las voy a calificar de casi escandalosas.

Hemos llegado a este recinto y votado el pedido de tratamiento sobre tablas sin que nadie conociera el dictamen. Nadie, o al menos una gran cantidad de senadores, lo tenía en sus manos —mientras lo repartían vimos que prácticamente ninguno lo tenía—, como lo acaba de expresar el señor senador por Corrientes.

Leer el dictamen, que tiene 16 páginas —lo digo para conocimiento de quien no lo tiene en sus manos y para quienes nos están escuchando, llevaría por lo menos veinte minutos; comprenderlo, entenderlo, nos llevaría por lo menos una hora; analizarlo y compararlo con la sanción de la Cámara de Diputados, requeriría dos o tres horas más.

Esto, de por sí, ya convierte en escandaloso que estemos tratando un tema sin saber de qué se trata.

No quiero entrar en la cuestión reglamentaria, porque esta es una sesión especial. No quiero entrar a considerar si se cumplió el artículo 22 de la citación o no. No lo quiero plantear porque estaríamos en una reunión sobre tablas de las sesiones ordinarias y entonces no sería una cuestión que podría provocar la nulidad.

En lo que estamos fallando acá —a eso se debe el desprestigio de las instituciones del que hablaba el jefe de Gabinete cuando vino a este recinto— es en la falta de transparencia.

La transparencia no es solamente cumplir con el principio republicano de la publicidad de los actos de los funcionarios, que la cumpliríamos publicando después el texto de la ley en el Boletín Oficial. Insisto: así ya cumpliríamos con el

principio republicano de la publicidad de los actos de los funcionarios.

La transparencia es un concepto nuevo. Es el concepto que exige a quienes tenemos responsabilidad política transmitir con la fuerza de un militante a toda la comunidad cada uno de nuestros actos, de qué se trata este proyecto de ley, qué alcances tiene, a quién perjudica, a quién beneficia y, sobre todo, cuál es el procedimiento que vamos a utilizar para su tratamiento, para su debate, que debe ser público.

Debimos hacer la ronda de consultas de manera abierta, y una vez cerrada la ronda de consultas y pasado el tema a comisión, debimos habernos tomado el tiempo suficiente en comisión para realizar las negociaciones, transacciones, debates, etcétera. Luego, deberíamos haber fijado una fecha, en la cual cada uno tuviera su dictamen. De esta forma, hubiéramos podido participar de toda la elaboración del dictamen y recién entonces llegar a esta discusión. Pero no lo hicimos así.

Recuerdo cuando se trató el proyecto de ley sindical, cuyo tratamiento fue tal vez más duro que el de ésta —en este sentido, debo elogiar a los señores senadores Britos y Brasesco, que fueron los operadores políticos del tema—; se hicieron todas las consultas que correspondían ante los sectores económicos, políticos, sociales y, sobre todo, gremiales, y recién luego de ello, cuando todos podíamos participar y la comunidad sabía de qué se trataba, se hizo la ronda de negociaciones, se fijó una fecha y se trató el tema. Y aclaro que todos teníamos el correspondiente orden del día, para saber de qué se trataba.

Entonces, la carencia que hoy tenemos reside en esta falta de militancia para transmitir el tema, es decir a quién beneficia, a quién perjudica y qué es lo que estamos considerando. Creo que nos falta transparencia en el tratamiento.

Por otro lado, está la cuestión de que nadie se hace cargo del proyecto. A veces aparecían negociaciones fuera de esta casa, o en la comisión, o en un bloque u otro, pero nadie se hacía cargo. Entonces, esta situación luego tiene su repercusión, porque no queda trabada horizontalmente en la sociedad y menos todavía en los agentes que deben ejecutar los beneficios o desgracias de esta iniciativa.

Otra cuestión que quiero tocar, como formal, es que el tratamiento que estamos haciendo, a la luz de lo que se llama la teoría de la decisión,

sería irracional y no democrático; y no digo que le falte independencia, porque sería ir más allá.

En efecto, una decisión individual se toma con pleno conocimiento de los hechos. Por ejemplo, si una persona tiene que decidir entre viajar en avión o en tren, primero analizará qué empresas hay, cuánto tiempo tardará, cuánto le saldrán los pasajes y, luego, optará por uno u otro medio, pero con conocimiento de los hechos.

El único momento en que uno decide sin conocimiento de los hechos es cuando juega, por ejemplo, a la ruleta, porque no sabe qué número saldrá —si no, seríamos campeones de ruleta—, entonces, es el azar el que decide. Ésta es una decisión irracional.

Pero esta decisión que hoy debemos tomar no es individual sino colectiva y es obligación que todos tengamos el mismo y pleno conocimiento de los hechos a considerar, porque si no algunos estaremos decidiendo al azar, porque no sabemos de qué se trata y no conocemos el proyecto, mientras que otros lo harán con entendimiento de la situación.

Entonces, cuando se produce esto, podemos decir que la decisión no es democrática, porque hay un grupo cerrado y exclusivo que tiene pleno conocimiento de las cosas. Esta decisión no es democrática sino oligárquica.

Estas serían las cuestiones formales. En realidad, si hubiera cuestiones formales, con una ley buena, de qué serviría oponerme sobre la base de cuestiones formales.

Pero esta iniciativa, a la que yo llamo escandalosa, poco transparente, de la cual nadie se hace cargo, que es irracional y no democrática, constituye lo que será la ley —o la anti ley, no sé cómo decirle— más importante del siglo, porque es la que destruirá el derecho laboral.

En efecto, hoy estamos considerando una iniciativa que destruye el derecho del trabajo. No se trata de un proyecto, como se dijo al principio, que consiste en un juego de valores entre la generación de empleo y el ajuste de ciertas condiciones de trabajo.

El propio oficialismo se dedicó prolijamente a contarnos que de esto no se trataba y que no tenía nada que ver con la plena ocupación o el empleo. Así, en la Cámara de Diputados, el legislador Raimundi dijo: “Si este proyecto de ley no genera por sí mismo empleo, lo que ha sido reconocido por el propio bloque mayoritario que impulsa la iniciativa...”.

Por su parte, la diputada Stolbizer señaló: "Entonces, frente a la pregunta de por qué lo hacemos si hemos dicho que no genera empleo... Para responder a la pregunta de por qué llevamos adelante este proyecto de reforma laboral si no genera empleo, debo aclarar que nunca dijimos que esta iniciativa resolvía el problema de la desocupación".

Asimismo, el diputado Polino dijo: "Pero estamos convencidos de que esos sanos propósitos, lamentablemente, no se van a lograr con este proyecto de ley. Actualmente el problema que preocupa a la gente es el de la desocupación". No debemos modificar estas normas de legislación laboral, sino tomar medidas de política económica que reviertan el modelo conservador que comenzó a aplicarse en los últimos años en este país.

El diputado Volando dijo: "Hoy hemos asistido a una verdadera maratón de discursos; en general han sido buenos, pero de todos modos me retiraré dolido de esta sesión porque creo que nada han aportado a la solución de los problemas que estamos debatiendo".

El diputado Brandoni manifestó: "Este proyecto de ley es una simple herramienta porque, en sí misma, no significa nada".

Me apoyo, entonces, en los fundamentos de los propios diputados del oficialismo para sostener que lo que estamos tratando aquí no es precisamente un proyecto que generará empleo.

Sí sostengo que se trata de la eliminación del derecho laboral.

Los derechos sociales y laborales son los derechos humanos de segunda generación. Los de primera generación son aquellos que comenzaron a verse en el mundo a partir de la revolución francesa y de la revolución norteamericana, y que llegaron a nuestro país a partir de la europeización, que trajo estas ideas de libertad e igualdad.

Si tomamos el año 1810 como el momento en que comenzamos a transitar nuestro camino, vemos que recién cuarenta años más tarde, en 1853, consagramos en nuestra Patria los derechos humanos de primera generación. Tardamos, reitero, más de cuarenta años en establecerlos en nuestra legislación, a partir de la Constitución de 1853. Perdimos cuarenta años.

Luego aparecen los derechos humanos de segunda generación, que comienzan a partir de la

gran explotación de la revolución industrial y, fundamentalmente, en el siglo XX. Y aquí no fue la ola europeizadora la que los estableció; fueron necesarias revoluciones y la sangre de los trabajadores para imponer al mundo, en cada uno de los estados, los derechos humanos de segunda generación, los derechos sociales y laborales. Fueron las revoluciones rusa y mexicana las primeras en hacer pie en este aspecto.

Nosotros, como siempre, llegamos bastante tarde, e hizo falta un 17 de octubre de 1945 para darnos cuenta de la necesidad de que existieran en nuestro país los derechos humanos de segunda generación.

Y no fue suficiente con el 17 de octubre porque esos derechos recién fueron incorporados en aquella cuestionada o no Constitución de 1957, con el establecimiento del artículo 14 bis. Tenemos entonces los derechos humanos de segunda generación, también cuarenta años después. Y luego de un período de lucha porque, reitero, ellos no nacieron de un proceso europeizador sino que cada pueblo se dio sus propios derechos humanos de segunda generación, que ahora han sido reconocidos universalmente.

Y allí nace el derecho laboral y su diferencia con otros derechos. ¿Qué distingue al derecho laboral de las otras ramas del derecho? La pirámide jurídica y la forma de selección de las normas para su aplicación.

En todo nuestro derecho se constituye la pirámide jurídica de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Nacional: la Constitución —ahora se han agregado los derechos humanos consagrados en pactos internacionales—, los tratados internacionales y las leyes que reglamentan su ejercicio son ley suprema de la Nación. Esto se aplica en general y no existe ninguna discusión al respecto.

En el caso del derecho laboral esto no funciona así porque existe un principio que establece que en cada caso hay que hacer una propia pirámide jurídica a fin de posibilitar la aplicación de la norma más favorable al trabajador. Este es un principio básico del derecho laboral.

Entonces, en cada caso se debe seleccionar la norma más favorable al trabajador, y aplicarla.

Asimismo, existe el principio de irrenunciabilidad, que le impide al trabajador renunciar a la aplicación de estas normas.

Hoy venimos, como si tal cosa, a tirarnos flores y a decimos que hemos hecho un gran tra-

bajo de consenso, que creo que no es así. Y omitimos que estamos derogando el sistema que hace a la esencia del derecho laboral: la pirámide jurídica que forma el derecho laboral en cada caso. Esto tiene que ver con el famoso artículo que se discutía de la ley —me refiero específicamente al artículo 25— por el que se establece que las convenciones colectivas... —perdón, pero no tengo tanta práctica ni manejo de este proyecto de ley que acaba de llegar— de menor ámbito, o sea las que supuestamente formula el trabajador en forma más desprotegida, prevalecerán sobre cualquiera otra anterior de ámbito mayor aunque la de ámbito mayor se dicte después. Así lo indica el artículo 24.

Con esto...

**Sr. López.** — ¿Me permite una interrupción?

**Sr. Presidente.** — El señor senador López le solicita una interrupción.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Sí; cómo no.

**Sr. Presidente.** — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador López.

**Sr. López.** — Señor presidente: yo creo que, contrariamente a lo que está manifestando el señor senador Rodríguez Saá, sigue vigente el artículo 7° de la ley 14.450, que establece el principio de la norma más favorable en la negociación colectiva, siempre que no ataque los niveles fijados por la ley de orden público, no por otro convenio colectivo.

El convenio colectivo siempre pudo afectar normas. Lo que se preservan son los contratos individuales. Esto está vigente en la norma incorporada a la ley de contratos de trabajo como “el principio más favorable”.

No necesariamente un convenio de ámbito menor tiene que modificar las relaciones de trabajo en desmedro de los derechos del trabajador. Y nosotros apostamos a que en realidad los derechos del trabajador sean fortalecidos por la negociación de mejor nivel.

**Sr. Presidente.** — Continúa en uso de la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

**Sr. Rodríguez Saá.** — En realidad es una opinión, señor senador. Yo tengo otra: el análisis que se hace a la luz del artículo 25 nuevo.

Es una ley posterior a ésta, que deroga la anterior. Todo lo que se oponga a esta ley será derogado. Al establecerse esto, se implementa una nueva pirámide jurídica donde va a prevalecer el convenio colectivo de trabajo de ámbito menor.

Nosotros sabemos lo que va a pasar: se terminarán haciendo siempre contratos de adhesión. Se van a hacer convenciones colectivas —sobre todo en las empresas más nuevas, en aquellas a las que puedan ingresar trabajadores que recién ingresan— con el aval de los trabajadores posiblemente necesitados, en un espacio de absoluta desocupación, para conseguir trabajo. Entonces, se van a dictar normas en las que prácticamente el contrato de trabajo será un contrato de adhesión, y el trabajador va a tener que adherir al convenio que ya tenga “fabricado” la patronal.

A esto se le suma el tema de la caducidad establecida en el artículo 28 para los convenios colectivos de trabajo, sobre todo respecto de los salarios, a los que se les quita la llamada “ultra virtualidad” o la “ultra actividad”. Al caducar esto, queda prácticamente en manos del convenio colectivo de trabajo de ámbito menor. O sea que inexorablemente, vencido el último plazo —dos años para adelante y, en muchos, casos mucho menos— se va a hablar de nuevo de salario. Seguramente, todo lo que hemos dicho acá va a quedar en la realidad totalmente destrozado porque se va a bajar el salario a los trabajadores.

Yo creo, señor presidente, que la sociedad merece saber lo que estamos haciendo hoy. Porque si alguna vez en la Argentina existió un 17 de octubre, el día de hoy es un poquito al revés: hoy estamos destruyendo absolutamente todo el andamiaje jurídico laboral que protegía a los trabajadores.

Finalmente, quiero referirme brevemente a este tema de por qué debemos “sacar” esta ley; por qué este apuro; cuál es el apuro; por qué debemos tratarla hoy y no la semana que viene, con un dictamen. ¿Por qué no dejaron que se imprimiera el orden del día?

Acá nadie se hace cargo. Nadie explica el porqué de esta urgencia tan despiadada. Nadie se ha animado a decir: “Esto lo pide el Fondo Monetario Internacional, entonces hay que sacarlo”.

Lo que sé es que el Fondo Monetario Internacional está a pocas cuadras de la Casa Blanca. Y si hay alguien que no cumple ninguna de las órdenes y medidas del Fondo Monetario Internacional, es la Casa Blanca.

Aparte, en el propio seno de la ciudad en donde está el Fondo Monetario Internacional, se producen manifestaciones que, en cualquier



momento, se van a parecer a las que tuvimos nosotros aquí.

Quiere decir que esto está cuestionado. Pero como lo dice el Fondo, salimos urgente a hacerle caso. Y yo creo que es un terrible error. Además de un error económico, es un error social.

Nosotros estamos en el Mercosur. Nuestros problemas son los del Mercosur. La primera legislación laboral común que tenemos que buscar tiene que ser la del Mercosur, para solucionar los problemas laborales del Mercosur. Para suprimir las diferencias que existen dentro del propio Mercosur, para evitar las migraciones internas y para hacer cierto aquello de que necesitamos del libre tránsito de personas, servicios y bienes.

Por eso señor presidente, y para ser breve, voy a votar en contra de esta ley porque no es transparente. El procedimiento no ha sido transparente. Nadie se hace cargo de la responsabilidad política de esta ley, que ha sido decidida de manera no democrática e irracional, y está eliminando el derecho laboral.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Del Piero.** — Señor presidente: quiero manifestar que he considerado oportuno el tratamiento de esta ley de modernización de las relaciones laborales para la generación de empleo estable a los efectos de plantear una radiografía de la situación del empleo en la Argentina, después de una década de fuertes y violentas transformaciones estructurales.

Voy a solicitar la inserción de mi discurso, no sin antes dejar planteado que el sentido de esta radiografía es, justamente, plasmar en una forma lo más precisa posible —con estadísticas y consideraciones estructurales—, la profunda relación entre el aparato productivo que hoy exhibe la Argentina y la falta de competitividad de la economía nacional.

Y lo hago movido por la intención de que éste sea un material de debate, justamente para reflexionar sobre la legislación laboral vigente, que nuestro gobierno —el gobierno de la Alianza— ha considerado necesario modernizar.

Y modernizarla a partir de las relaciones de poder, a partir de la representación gremial y de las posibilidades que a futuro debemos transitar como argentinos, en cómo el capital y el trabajo

vuelven a converger en función de un modelo productivo de desarrollo y de competitividad.

Por eso me pareció oportuno dejar planteada esta radiografía, respecto de la que solicito su inserción, a los efectos de dar un más fácil y rápido tratamiento a este proyecto, que consideramos a todas luces revolucionario y estructural para la economía argentina y el bienestar de los argentinos.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente:

Comenzaré mi intervención en este debate repitiendo una afirmación muchas veces dicha y escuchada: en Argentina, el desempleo es estructural. Por lo tanto, es necesario comprender no sólo las características del mercado laboral sino también el modelo productivo y exportador que ha quedado configurado en nuestro país después de una década de fuertes, por no decir violentas, transformaciones estructurales. De esta manera, también reafirmo otra aseveración reiterada desde que el Poder Ejecutivo nacional propuso esta modernización laboral. Se trata de aquella que dice que una ley que regula este sector no genera empleo por sí sola. Por eso son imprescindibles aquellas iniciativas que el gobierno en algunos casos ya ha enviado al Parlamento y, en otros, están en elaboración tendientes a disminuir el déficit fiscal, atacar la evasión, generar mejores condiciones para la producción haciendo hincapié en las pequeñas y medianas empresas. No debemos olvidar que el verdadero núcleo es la falta de competitividad de la economía argentina. En este sentido, es necesario recorrer el camino que permita reducir el costo financiero, profundizar la baja en los costos de los servicios, introduciendo más competencia e innovación tecnológica; adecuar los criterios de la política de administración de comercio exterior: desarrollar obras de infraestructura y reducir los impuestos que gravan las inversiones y la producción. Debe también revalorizarse el rol de las PyMES y de las empresas de capital nacional modernizándolas y elevando sustancialmente su eficiencia económica.

En este marco, es oportuno recordar, como sostenemos desde nuestro gobierno, que no habrá más crecimiento sin austeridad fiscal, no habrá justicia sin un ataque persistente a la evasión, no habrá políticas sociales para asistir a quienes han quedado marginados del proceso productivo sin un gasto público transparente que haya dejado atrás la corrupción y la ineficiencia.

En función de lo antedicho, señor presidente, quiero describir el contexto en que se ha propuesto esta ley de modernización laboral

El Plan de Convertibilidad, con una tasa de cambio que pronto se rezagó por el crecimiento de los precios

internos en los primeros meses, puso el marco general. Ese tipo de cambio junto con un proceso de apertura comercial sumamente violento e indiscriminado colocó en situación no competitiva a amplios sectores de la economía. La apertura actuaba como disciplinador de los precios internos y el funcionamiento del mercado en las nuevas condiciones recrearía rápidamente condiciones para la inversión en las nuevas actividades que compensarían el desempleo generado por la apertura. Sabemos que esto no ocurrió. A esto se agregaron las privatizaciones con los consiguientes despidos de personal.

El importante ritmo de crecimiento del PBI desde 1992 no fue parejo ni regional ni sectorialmente. Hoy, la estructura productiva del país tiene diferentes niveles de modernidad y de competitividad internacional. Esa existencia de un país de dos velocidades desde el punto de vista productivo se traslada al mercado de trabajo: una parte es un mercado de trabajo relativamente moderno y otra parte es un mercado de trabajo de segunda, donde la frontera entre la ocupación y la desocupación son difusas, donde hay precariedad, donde no hay acceso a la seguridad social, bajos niveles de ingreso, etc.

Contrariamente a lo que se sostiene habitualmente, si no hubiera habido empresas que estuvieran en condiciones de incorporar la tecnología necesaria para competir, lo más probable es que hubieran cerrado sus puertas por lo cual el desempleo sería aún mayor.

Durante la década pasada al tiempo que desde el gobierno se sostenía la necesidad de la competencia, de la inserción en el mundo, de la modernización, etc., los grandes grupos tenían reglas distintas: concesiones con resguardos monopólicos y prebendas de distinto tipo. Está claro que este es uno de los elementos que participó en la inexistencia de la competitividad de la economía argentina. Muchos de los primeros pasos de la actual administración están yendo en sentido contrario (rebaja de tarifas, estudio de los contratos de concesión y sus renegociaciones para convertirlos en favorables a los usuarios [correo], construcción de marcos regulatorios, etc.)

El proceso de apertura sin red de contención social y sin un apoyo para la reconversión productiva para los sectores más débiles fue el principal error de la política de esos años.

Las mismas reglas de juego mencionadas generaron un proceso de primarización de la economía argentina, volviendo menos competitivas a las producciones con mayor valor agregado. Ese proceso de primarización se advierte en las escasas producciones competitivas y exportables a nivel internacional y tuvo, además, el efecto de requerir mano de obra menos calificada y en menores cantidades.

El crecimiento del precio de los servicios, las nuevas tecnologías disponibles y las altas tasas de inte-

rés elevaron en forma significativa la escala mínima, por lo cual se produjo un proceso de desaparición de pequeños productores agropecuarios, que de la misma manera que en la industria, no contaron con asistencia en serio para reconvertirse a otras alternativas productivas. Esta es la explicación de fondo por la cual el crecimiento del PBI de los últimos años genera empleos en muy poca cantidad.

Hoy el tema central es que el crecimiento de la economía (PBI), con sus características de actividades poco sofisticadas, genera poco empleo. Es obvio, entonces, que en tiempos de recesión la situación laboral se torna crítica.

De la misma manera que la mejor política social es el empleo, la mejor política de empleo es una política económica que, preservando la estabilidad y el equilibrio fiscal, tenga como objetivos desarrollar la industria nacional y dar trabajo.

El crecimiento debe orientarse a desarrollar actividades económicas competitivas con un mayor grado de incorporación de valor agregado, de sofisticación en el diseño de los productos, o sea, de necesidad de incorporación de mano de obra. El Estado debe promover políticas activas en este sentido.

Asimismo se debe apoyar a las PyMES para que sean competitivas, ganen mercados y tomen personal. En ese sentido trabaja este gobierno, que ya mandó un proyecto de ley con estos objetivos a la Cámara de Diputados.

Se debe luchar contra el dumping y el contrabando, compromiso que ha asumido el presidente de la Nación en forma personal y pudimos escuchar en su reciente mensaje a la Asamblea Legislativa.

Es el Estado el que debe garantizar la competencia, porque un capitalismo sin competencia es un capitalismo prebendario o monopólico y también debe ayudar a las PyME a que encuentren actividades de cooperación, a que formen redes.

Nuestros pequeños y medianos productores hace años que viven en la más absoluta desprotección por parte del Estado. El Estado ha perdido capacidad de garantizar el cumplimiento de los derechos y las obligaciones de todos; se desfinanció, se quedó sin recursos genuinos para implementar políticas activas y se corrompió: entonces los que más necesitan se quedaron sin un Estado que los proteja, y, ¿quiénes se beneficiaron de esta situación?, los grandes monopolios. Es indudable que la economía y la riqueza se han concentrado dramáticamente en nuestro país.

Este modelo productivo necesariamente redundó en la expulsión de los trabajadores del sistema que tiene cifras y, en este caso, los números no son fríos porque son demasiado duros como para que no nos hablen de seres humanos que están sufriendo y padeciendo la situación de desempleo y subocupación.

La problemática del desempleo y su consecuencia de desintegración familiar y social, han calado hondo en la sociedad argentina:

De cada 100 personas que están en el mercado laboral: (Fuente: Ministerio de Trabajo y Consultora Equis).

- 13 están totalmente desocupadas; de ellas 11 subsisten sólo con la ayuda de familiares o amigos.

- Otras 12 trabajan en forma intermitente, alternando changas en negro con períodos habituales de desempleo, sin ninguna protección.

- 20 tienen un empleo asalariado en negro, sin protección ni seguridad social; su remuneración es la mitad que la de los trabajadores en blanco.

- 12 son trabajadores autónomos sin seguridad social.

- Sólo el 40 % tiene un empleo estable en blanco, pero 1 de cada 3 trabaja jornadas superiores a la legal sin recibir compensación alguna en cerca de la mitad de los casos.

- El empleo en negro no cesa de crecer. Desde el inicio de la anterior gestión la proporción de asalariados no registrados aumentó el 10 %, hasta el 36 % del total. A comienzos de la década del 80 eran menos del 18 %. 8 de cada 10 asalariados en negro pertenecen a micro y pequeñas empresas de menos de 20 personas.

- El 45 % de los ocupados de la PEA urbana proviene del sector informal, situación crítica que se incorpora al análisis de la PEA rural, no relevada por el INDEC en la EPH, haría trepar la ocupación informal sobre el 50 % del total de los ocupados nacionales.

Desagregación regional del 45 % indicado precedentemente:

- El 35 % de los asalariados del país no posee los beneficios sociales correspondientes. Esta ausencia de beneficios sociales, síntoma inequívoco de la informalidad y trabajo en negro que modela mayoritariamente el mercado de trabajo privado, encuentra su contrapartida en el singular empleo público que más allá de la baja observada en la última década, aún impacta decisivamente en el mercado de trabajo nacional en general y regional en particular.

Quiero remarcar con especial fuerza que es imprescindible formalizar el trabajo. La formalización no sólo brinda protección y seguridad social, también posibilita la integración plena al mercado. La formalización del trabajo es un formidable instrumento para la inclusión social.

Además, aquel que pierde el empleo está desprotegido. El seguro de desempleo cubre no mucho más del 5 % de los desocupados incluso, con una versión mucho más laxa que la actual, 4 de cada 5

desempleados no califican para el seguro de desempleo porque son informales.

La administración Menem, pretendió asimilar trabajo genuino con simples changas o empleo precario oficial tipo Plan Trabajar.

Se confundió, entonces, baja en el nivel de desocupación abierta inducida por empleo precario con solución de problemas ocupacionales.

Grave error que distorsiona el diagnóstico y posterga soluciones. Por lo tanto, resulta auspicioso que las preocupaciones centrales del nuevo Ministerio de Trabajo sean tanto la desocupación como el trabajo de calidad, empleo genuino y entonces mayoritariamente empleo privado.

Los resultados de las últimas mediciones de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestran un simultáneo aumento de la desocupación abierta en el lapso de octubre de 1998 (12,4 %) a octubre de 1999 (13,8 %) y un empeoramiento de la calidad de los escasos puestos de trabajo generados, cuyo déficit horario y precarización formal inducen a ser captados bajo la categoría de subocupación.

Una de las consecuencias inmediatas de este alto impacto de la economía informal sobre el nivel de ocupación resulta claramente la precarización del trabajo.

La creciente pérdida de calidad en el empleo del país es una realidad incontrovertible, medida año tras año por las estadísticas oficiales y privadas más confiables. El enorme peso del sector informal sobre los niveles de ocupación modela hoy un mercado de trabajo privado signado por la precariedad, la penuria horaria o la sobreocupación y el trabajo en negro.

La contracara funcional a la persistente degradación del mercado de trabajo privado es la crítica magnitud del empleo público regional, muchas veces improductivo y resultado de décadas de clientelismo político e ineficiencia estatal. Empleo público transformado en única salida ocupacional formal, que regionalmente asume proporciones cuya magnitud es proporcional a la pobreza de las provincias.

Esta combinación de creciente empleo privado precario y de baja productividad y elevados niveles de empleo estatal, son las dos modalidades ocupacionales hoy dominantes del mercado de trabajo nacional que, lejos de oponerse se complementan y explican mutuamente, constituyendo una de las principales encrucijadas del mercado de trabajo argentino actual.

Un mal sistema normativo y la falta de políticas coherentes inhibe la generación de buenos empleos, es decir, la equidad social, y la competitividad microeconómica, perpetuando el atraso y la exclusión.

Por eso, en la Alianza, creemos necesario aprobar esta ley.

El marco que acabo de describir, nos habla claramente y sin dejar lugar a dudas, de que los más débiles son los que padecen las peores situaciones. Por eso, esta ley contempla objetivos fundamentales como la formalización del empleo y la posibilidad de que estos trabajadores, los que sufren estas condiciones laborales, puedan negociar en la base, con la asistencia del sindicato nacional, sus convenios y, de esta manera, tender al achicamiento de las enormes brechas sociales, laborales y económicas que existen en nuestra sociedad.

Porque debemos superar este cuadro que, para cada uno que lo padece, es dramático; este gobierno ha decidido encarar las diversas acciones que el Poder Legislativo tiene a consideración, entre las que se encuentra esta ley de modernización laboral.

Señor presidente, por lo dicho y por los motivos que expuso el senador Alcides López, miembro informante de la Alianza, es que estoy convencido de la necesidad de esta ley y descuento que mis pares, ejerciendo la responsabilidad que su función les asignó y en beneficio del pueblo argentino, de nuestra gente, sancionarán este proyecto de ley.

Muchas gracias.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Maya.** – Señor presidente: voy a adelantar mi voto negativo respecto de esta ley, tanto en general como en particular.

Y al final de mi exposición voy a plantear una formulación concreta de vuelta a comisión, proponiendo otro camino a seguir.

He escuchado aquí a gente que manifestaba estar muy contenta. Y yo creo que la inmensa mayoría de nuestro bloque tiene una alta cuota de tristeza, y hace un gran esfuerzo inspirado en un espíritu constructivo y positivo.

Pero realmente nos aprestamos a ver que se consagra un paso lamentable en la historia de las luchas sociales del país.

No viene mal recordar lo que decía Yrigoyen, que el radicalismo había nacido a la vida como resultado de la indignación y la rebeldía por el impiadoso desprecio por las clases populares que tenían los representantes del régimen.

Eran las épocas en que los lomos negros disponían de la vida y de las costumbres de todos. Le arreglaban las cuentas cuándo y cómo querían a la gente. Y los más necesitados se encon-

traban en un estado de desprotección realmente deplorable, muy cercano a lo que sucedía en la época de la esclavitud.

Por eso resulta paradójico que sea este mismo partido de Hipólito Yrigoyen el que comienza una instancia nueva, cerca de un 1º de mayo: la de poner en terapia intensiva al derecho laboral, y con muy poco oxígeno; con un oxígeno de dos años.

Quienes hicieron nacer, en alguna medida, el derecho laboral, que posteriormente profundizó Juan Perón, hoy están consagrando el principio de la muerte de este régimen protector y tuitivo de los más necesitados.

Digo esto, señor presidente, porque escuchar que se está modernizando el derecho laboral, o que se establece un régimen para el empleo estable, sólo puede admitirse como una humorada. Porque lo que hace es consagrar lesiones terminales e infligir en el cuerpo legal de la estructura y del andamiaje del derecho laboral serios perjuicios.

Quién puede decir que cuando desaparece la protección por el preaviso o el despido no estamos perjudicando el derecho laboral. Sabemos que esto es una consecuencia de la realidad. Con dolor hemos vivido el hecho de que las propias circunstancias económicas y de necesidad han generado esta situación más allá de la ley que estamos dictando.

Pero avanzar sobre la ultra actividad, la caída de los convenios básicos, es sacarle la red de protección mínima que debe existir en la negociación de un convenio colectivo.

¿Qué está pasando en el mundo, señor presidente? ¿Qué está pasando en nuestro país? Este es el momento en que las entidades financieras, cuando se ven amenazadas por colapsos internacionales, crean entre ellas, con los fondos del país y de los inversores, sus propios mecanismos de protección y de seguridad. Qué son si no los fondos que crean las distintas entidades financieras en resguardo de su propia subsistencia. Y, mientras se está protegiendo al capital, como bien lo hacen sus titulares, nosotros estamos desprotegiendo al trabajador, sacándole el lazo mínimo de anclaje con la realidad y con la justicia que significa el principio de la ultra actividad.

Esto es condenar la negociación a dos años en la vigencia de la ultra actividad. Quién puede ignorar lo que va a pasar con los convenios colectivos. Los que hemos participado en defensa de las organizaciones sindicales, en las discusiones de los convenios colectivos, sabemos perfectamente que en esta realidad que vive el país, con este marco de desocupación, no va a haber otra cosa que la caída libre. Y lo mismo nos va a pasar con la negociación descentralizada y la negociación por empresa.

Durante más de cuarenta y cinco años, desde 1955, se ha luchado para lograr esto. Llevaron a cabo miles de embates contra las organizaciones y dirigentes sindicales, planearon revoluciones, voltearon gobiernos democráticos e hicieron todo tipo de tropelías institucionales para poder avanzar sobre los derechos de los trabajadores.

Las primeras medidas que tomaban todos estos gobiernos eran derogar estatutos, convenios y regímenes de protección de los trabajadores.

Hoy, lamentablemente, pese al esfuerzo que sé que de buena fe han hecho nuestros compañeros, nos encontramos con esta triste realidad, que es el primer acto de gobierno de la Alianza.

"Somos más": son más los que van a ganar menos y son más los que van a estar desocupados con esta ley. Este es el mensaje que no se dijo en la campaña.

Por eso, no me siento obligado moralmente a acompañar esto. Creo que se trata de la consagración en una ley del engaño que se hizo durante la campaña electoral. Seguramente, se podrían haber hecho otras cosas positivas para sortear esta emergencia.

Digo también que es importante reseñar no tanto las dificultades o los requisitos formales previos al tratamiento de este proyecto, que no tienen la entidad suficiente frente al daño que traerá al pueblo trabajador. Sin embargo, no he escuchado nada al respecto de los señores presidente y ex presidente de la bancada del radicalismo, quienes nos dictaban verdaderas pastorales sobre el Reglamento y cómo debía tratarse una ley. Acá han pasado por el costado, presionando a los trabajadores y a los legisladores. Han gastado fondos del Estado, recursos públicos, para instalar ideas "desacreditantes" de todos nosotros, intentando extorsionar y presionar sobre nuestra voluntad. Esta es la metodología que an-

tes se denunciaba y que nunca hemos ejecutado. No obstante, no hemos escuchado a estos abanderados de las prédicas y los sermones que nos digan algo al respecto.

Señor presidente: se está tratando de un proyecto que aquel que más lo conoce no hace más de una hora que lo ha visto; incluso, algunos legisladores han levantado la mano para votar el tratamiento sobre tablas sin tener el proyecto en su banca. Pero esta cuestión es secundaria. No hablaremos del tratamiento sobre tablas de un proyecto de esta importancia, pese a que me acuerdo como si fuera un mensaje bíblico cuando el radicalismo nos decía: "Leyes sobre tablas, jamás". Pero esta ley de defunción del derecho laboral, que avasalla los derechos de los trabajadores y que es promovida por este gobierno, se trata sobre tablas, con presiones, sin dictamen y pasando por el costado del Reglamento.

Quiero saber por qué estamos tratando este proyecto ya que parece que nadie lo quiere. Resulta curioso, pero es así. Es como las brujas: están, las hay. Nadie quiere esta ley.

El gobierno dice que por sí sola no crea trabajo; entonces, ¿para qué la sancionamos?

El gobierno dice que baja salarial no va a haber; entonces, si no habrá ni baja ni suba salarial, ¿para qué la tratamos?

Por supuesto que no va a haber despidos; entonces, ¿quién es el que la impulsa? Creo que no es el Fondo Monetario Internacional porque, como otros que también están aquí, he participado de reuniones con el Fondo y éste pide estas cosas como algo secundario.

Creo que lo que le interesa al Fondo y a los tenedores de los capitales internacionales es que se paguen los intereses usurarios de la deuda. Si hay una legislación laboral que protege a las empresas internacionales para que tengan mayores márgenes de utilidad es algo secundario.

En esta ley está encerrado un principio ideológico básico de avance hacia los trabajadores. Es una lucha que desde hace muchos años — desde 1955 — viene encarnando el radicalismo. Pero nunca pudo doblegar el espíritu de lucha que le costó vidas al movimiento obrero, difamación de héroes y mártires.

Hoy, lamentablemente, estamos avanzando hacia esta triste realidad de que va a ser ley esto que perjudica los intereses de los trabaja-

dores. ¿Y por qué digo que esto es así? Yo sé que han hecho esfuerzos, que muchos de los integrantes de la Unión Cívica Radical han puesto la mayor buena voluntad; pero es más fuerte que ellos, es como aquello del alacrán y el sapo, que le pedía que lo cruzara por el arroyo porque si no se iba a morir ahogado. Y en la mitad del cruce del río, el alacrán pica al sapo y se ahogan los dos.

En los radicales es más fuerte la vocación antipopular y destrucción del gremialismo y del movimiento obrero porque siempre han luchado por eso, porque es la columna vertebral del peronismo y, más allá de estas leyes, lo seguirá siendo. Han puesto voluntad, pero ha sido más fuerte que ellos. La primera acción de este gobierno ha sido mandar esta ley retrógrada, que avasalla los derechos de los trabajadores.

Señor presidente: ¿por qué esta ley? Si el país estuviese en estado de emergencia nacional, de desesperación, sería bueno que avanzáramos con esta normativa, pero sería justo que antes lo hiciéramos con normativas similares sobre grupos sociales que tienen cuantiosos privilegios en el país. Entonces, si uno viese que se avanza sobre los sectores financieros, sobre los de la importación, sobre los sectores prebendarios de los servicios públicos, sobre los sectores de alta rentabilidad, nosotros deberíamos concluir con justicia que es bueno que los obreros y trabajadores también hagan un sacrificio porque previamente se les está exigiendo a otros sectores que tienen privilegios que los cedan. Pero vemos que es al revés, están intactos los intereses de los privilegiados en el país, como en muchos casos lo estuvieron durante nuestro gobierno. Esto no nos libera a nosotros de culpa. Pero que no hayamos podido avanzar no implica que hoy se siga con la misma temática con los sectores de privilegio y, para compensar ese desequilibrio, se le siga pidiendo nuevamente un aporte a los trabajadores que están en un estado, francamente, de debilidad.

Por eso esta ley me parece lamentable y creo que acá ha habido una historia de coherencias e incoherencias en su lucha. Si nosotros recordamos lo que ha pasado en el escenario cercano del país, el señor Hugo Moyano ha protestado por esta misma temática no sólo ahora, sino también contra nuestro gobierno y, lo que es peor, lo hizo acompañado de la mayoría de los dirigentes

que hoy están gobernando. Recuerdo que muchos de la Alianza se peleaban por la vincha del "Perro" Santillán en los reclamos contra el presidente Menem; y hoy les dieron la espalda a los mismos que ayudaban en las movilizaciones para volverse contra ellos con esta ley retrógrada que avasalla los intereses de los trabajadores.

Nosotros, los legisladores del Partido Justicialista, cuando el gobierno mandó una ley similar a esta, la rechazamos y la Alianza también lo hizo. Muchos mantenemos la coherencia y la volvemos a rechazar hoy; y yo sé que la inmensa mayoría de mis compañeros ha hecho un gran esfuerzo porque está en la duda de cuál es el camino de la colaboración para sacar adelante el país. Sé que muchos están realmente mortificados y preocupados en la búsqueda de una salida ante un gobierno que no plantea caminos, que no sólo tiene lentitud sino que no tiene creatividad ni imaginación. Pero los que han cambiado son los que antes votaban en contra y hoy lo hacen a favor de esta ley. Hay coherencia en la protesta de Moyano; pero no la hay en el voto de los legisladores de la Alianza.

Señor presidente: también digo que se ha recurrido en este camino a metodologías realmente reprochables.

**Sr. Branda.** — Que hagan silencio, por favor.

**Sr. Presidente.** — Por favor: se pide silencio en las galerías.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador Maya.

**Sr. Maya.** — Por eso, señor presidente, cuando empezó el tratamiento de este tema sabía que íbamos a tener muchos problemas, porque estaban inspirados en la buena fe. Sabía de compañeros que tenían la mejor vocación de construir y que se encontraban realmente mortificados ante la toma de una decisión. Yo adelanté un voto de rechazo y propicié medidas alternativas junto a los senadores Di Pietro, Verna y Ortega, con quienes presentamos proyectos alternativos, tratando de contribuir y de hacer reflexionar al gobierno en el sentido de que esta ley únicamente contribuía a profundizar el malhumor social, la queja y el deterioro de la sociedad política. Señalamos que no sólo iba contra el gobierno sino que también contra la oposición, porque hoy la gente exige paz social a to-

dos, sin discriminar quién gobierna y quién está en la oposición. El padre de familia no piensa cuando se levanta a la mañana quién está a favor y quién se opone a este proyecto. Quiere que haya fuentes de trabajo reales. En esa dirección apuntan nuestros planteos. Por ejemplo, el tema aprobado anteriormente constituye una medida de emergencia positiva tendiente a restablecer los planes Trabajar.

Por todas las consideraciones expuestas, señor presidente, voy a ratificar mi rechazo a este proyecto de ley, sin avanzar en criterios jurídicos sobre la existencia del derecho laboral o sobre la necesidad de fundamentar cada una de sus figuras.

Formalmente voy a proponer la vuelta a comisión de este proyecto. Asimismo, propicio que el Senado apruebe un proyecto de declaración por el cual se pida al Poder Ejecutivo nacional que con su legitimidad y prestigio continúe avanzando en la decisión que ha manifestado de enfocar el tema de la lucha contra la desocupación. Que convoque a todas las fuerzas sociales, políticas y económicas a una gran concertación nacional. No puede haber una ley positiva con media Alianza adentro, con medio PJ adentro, con las organizaciones gremiales quebradas, con los empresarios ausentes, con la pastoral social, el clero y todos los predicadores señalando su condena a esta ley que no tiene consenso, que ya no está esmerilada, porque desde el fondo, desde el tuétano carece de la protección mínima.

Creo que es imprescindible que el presidente, con la autoridad que posee en estos tramos iniciales de gobierno, llame a una concertación para que todos hagan sus aportes. La creación de fuentes de trabajo es como una mesa: no puede tener una sola pata. Y en esta ley tenemos una sola pata: la pata de los trabajadores. Falta el sostén de los otros grupos de la sociedad nacional: de los grupos financieros, de los grupos prebendarios de los servicios cautivos de las importaciones.

Por eso, junto con mi rechazo en general y en particular mociono concretamente, señor presidente, la vuelta a comisión de este proyecto de ley, a los fines indicados.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Varizat.

**Sr. Varizat.** — Señor presidente: quiero adelantar mi voto negativo a este proyecto de ley por las razones que voy a exponer a continuación.

Creo que es una ley falaz porque, en aras de una flexibilización laboral, pretende generar más puestos de trabajo y proteger los que ya existen. Creo que los argentinos podemos exhibir dos récords en materia laboral. Uno de ellos es que somos uno de los países del mundo que tiene el más alto promedio de horas de jornada laboral, y también somos tal vez el país que tiene el mayor índice de ocupación en negro. Todo esto a causa de las inadecuadas respuestas que dio el país al fenómeno de la globalización. Todo esto en virtud de la flexibilización puesta en marcha por el gobierno anterior —no por éste—, que trajo como consecuencia precarización laboral, más desocupación y más trabajo en negro.

Aquí se insiste con esto: se vuelve a flexibilizar el trabajo y se pretende también flexibilizar los sindicatos. Este es un proyecto de ley de flexibilización laboral y de flexibilización sindical.

Creo que la norma solamente logra como objetivo precarizar más el trabajo en la Argentina, aumentar la inseguridad, destruir en gran parte la legislación laboral y preparar el caldo de cultivo para las protestas sociales y para la inseguridad en general. Considero que es una iniciativa completamente negativa, que sólo tiene como objetivos bajar el salario y destruir al movimiento sindical argentino.

Digo que tiene como objetivo bajar el salario, porque creo que responde a algo que han dado en llamar los integrantes del gobierno de la Alianza “esa pesada herencia que recibieron del gobierno anterior”. Como parte de esa pesada herencia han recibido a los empresarios amigos que les están exigiendo bajar los salarios.

Asimismo, esta norma pretende desarmar o desarticular el movimiento sindical argentino, simplemente, porque dicho movimiento es peronista. Esta no es la primera vez que se intenta algo similar. Se lo hizo en el año 1984, a pocos meses de iniciada la gestión de gobierno del ex presidente Alfonsín. Se intentó también durante la gestión del ex presidente Menem y no se pudo hacer, porque la Legislatura le dijo que no.

Creo que el problema laboral no se resuelve bajando salarios ni desarticulando al movimiento sindical argentino. Se resuelve con un cambio radical —y esto no es por el partido— del sistema impositivo, que no fue el que aprobamos acá hace pocos meses, que iba a generar más recaudación, lo cual fue un error —y así me permití marcarlo en su momento—, puesto que era una ley que iba en contra de lo que pretendía, que iba a generar mayor recesión, mayor desempleo y menor recaudación. Eso se está viendo ahora y es reconocido hasta por los propios economistas de la Alianza. Creo que están equivocándose de nuevo.

Reafirmo lo que entiendo debe ser el rol de la oposición; esto es, la exigencia al oficialismo de que cumpla con el contrato social que ofreció a la sociedad en las campañas electorales, y que no haga precisamente lo contrario. Tanto en la iniciativa de reforma impositiva, que sancionamos hace pocos meses, como en este proyecto, se está haciendo lo contrario de lo que se dijo que se iba a hacer.

Considero que es vital que se respete el contrato social porque es el fundamento esencial y básico de toda democracia.

Creo que este proyecto de ley nos pone realmente en una situación grave; perjudica notablemente a los trabajadores argentinos, retrotrae a la Argentina a lo que sucedía quince o veinte años atrás —o más—, deja por el camino las luchas de todo un pueblo para alcanzar regímenes laborales más justos, legislaciones laborales que contemplen derechos básicos. Esta norma abre la puerta a la Argentina de los años 20; nos retrotrae a esa Argentina.

Yo pertenezco fundamentalmente a un movimiento político que siempre sostuvo que tiene como columna vertebral a los trabajadores de la patria. Por esa razón no puedo votar y aprobar una ley que afecta y agrede a los trabajadores de la Argentina, porque si lo hace, está agrediendo a mi movimiento, a mi partido. Por lo tanto, reitero que rechazo esta ley.

Además quiero dejar sentado que tengo expreso mandato del Partido Justicialista de Santa Cruz, de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz y del gobernador de Santa Cruz para rechazar esta ley.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Branda.

**Sr. Branda.** — Señor presidente: voy a ser muy breve, atento a que es conocida y pública mi postura con respecto a esta ley; yo siempre he sido contrario porque consideré que no era oportuna, conveniente ni necesaria. Hubiera sido más conveniente tratarla con un consenso general; el partido oficialista tendría que haber convocado a todo el conjunto de la sociedad, pero no para considerar sólo esta única ley sino todo el marco económico y social, que sufre una profunda crisis en el país.

Por eso, señor presidente, quería fundamentar mi voto; y no es una contradicción. Los que nos desenvolvemos dentro de un bloque nos debemos atener a lo que la mayoría impone en su seno; si no, tendríamos que armar un bloque aparte. Creo que es muy conveniente decir esto, porque van a venir momentos difíciles para el país. Y la preservación de un bloque, como el Justicialista, es un gran centro de poder para poder resolver los problemas graves, no sólo de los trabajadores sino de la sociedad en su conjunto.

No voy a pedir la inserción del discurso que tenía sino que voy a decir que voy a acatar disciplinadamente la posición del bloque y a votar afirmativamente, porque sé también del gran esfuerzo que han hecho los compañeros que tuvieron que llevar adelante estas tratativas. Y sé que lo han hecho convencidos de que era lo mejor para el movimiento obrero y para el país. Quizá no han logrado lo máximo que les hemos pedido, pero creo que es lo suficiente como para decir que hay una preservación de lo que consideramos nosotros que era fundamental: mantener vivo —de alguna forma— al movimiento obrero y sus derechos individuales. Creo que si bien no satisface, han conseguido algo más de lo que originalmente sancionó la Cámara de Diputados.

Así que con estas palabras quería adelantar, por disciplina del bloque, mi voto afirmativo.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Cafiero.

**Sr. Cafiero.** — Señor presidente: esta es la sexta vez que el Parlamento argentino trata una iniciativa de la llamada “reforma laboral”. La primera fue la ley programada por el ex ministro de trabajo Rodolfo Díaz, en 1991. Después



vino Enrique Rodríguez con su proyecto del 93. Después, Armando Caro Figueroa, en 1995. Después fue el acta de coincidencias entre el gobierno y la CGT, también con Armando Caro Figueroa pero en 1997. Después fue la ley de Erman González, en 1998. También hubo otro proyecto de ley del Ejecutivo que el Senado, por lo menos nuestro bloque, rechazó. Ahora nos encontramos frente a este nuevo proyecto de ley en el que medidas de flexibilización laboral y de disminución de costos laborales son —según se argumenta— las que van a aumentar el nivel de empleo en la economía argentina.

Vale así decir que en estos diez años de sucesivas reformas laborales los resultados obtenidos en materia de empleo han sido manifiestamente negativos. En 1991 el desempleo abierto llegaba al 6,5 por ciento. Hoy es de 13,8 por ciento, luego de haber llegado hasta el 18 y el 20 por ciento. Según una revista del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, entre 1994 y 1999 se perdieron 145 mil empleos, aun cuando durante ese lapso las cargas sociales se rebajaron a la mitad, los salarios cayeron más del 20 por ciento, se firmaron numerosos convenios flexibles y se redujo drásticamente la indemnización por accidentes de trabajo. Esto demuestra que cifrar una expectativa muy fuerte en los efectos benéficos que este proyecto tendrá sobre el empleo sería un acto de gran ingenuidad política y aun de un gran desconocimiento de las leyes que, en definitiva, en nuestra sociedad, en nuestra economía argentina, establecen el nivel de empleo.

La reforma que se votó en Diputados tiene un poderoso impulso o prejuicio hacia la baja de los salarios. Esta reforma del concepto tradicional de la liquidación laboral tan magníficamente expuesta por algunos que me precedieron en el uso de la palabra sólo se explica si tiene como intención no una maldad, no un prejuicio ideológico de acabar con los fundamentos del derecho laboral. Se explica por la creencia de que haciendo y cumpliendo estos requisitos el país o su economía entrarán en un proceso de baja de salarios, que es lo que nos va a permitir aumentar la competitividad de la economía, remover el actual estacamiento, avanzar en el empleo. Porque se le asigna a esta cues-

tión de los salarios una importancia cuasi decisiva en el desempeño de la economía nacional.

Esta descentralización de convenios, al pasar los de ámbito menor a tener supremacía sobre los de ámbito mayor, es el vehículo a través del cual se cree que se va a producir esta reducción relativa de los salarios por convenio de actividad, los primeros tienen un nivel bastante superior a los segundos. Nunca se aclaró que esta es una ficción estadística; depende de cómo se manejen las cifras. Lo cierto es que los salarios por empresa sólo corresponden a las empresas muy grandes y representan el 10 por ciento de los salarios que se acuerdan en los convenios por actividad. Los salarios por empresa tienen un piso para la negociación, que es el salario de los convenios ultra activos. Es decir que hay una serie de condiciones y de elementos que explican esto no como una direrencia en favor de los trabajadores por los convenios de ámbito menor sino como consecuencia de esta circunstancia que he tratado de aclarar.

Insisto: una suerte de convencimiento o de sabiduría convencional afirma que si se logra reducir el nivel de salarios se asegura una respuesta válida a la competitividad de la economía, el desarrollo y el crecimiento económicos, y el nivel de empleo.

Voy a leer expresiones de alguien que se ha ocupado de este asunto y que en un reportaje publicado en el diario "Clarín" el 6 de mayo de 1998 decía: "La necesidad de eliminar 'impuestos al trabajo' tampoco puede ser discutida. En cambio, hay que oponerse al intento de quienes —desde el gobierno o las empresas— hablan de flexibilidad pero, en realidad, quieren recortar salarios reales.

"Es falso que los salarios sean la causa de la escasa competitividad de la Argentina: los países más competitivos (según el ranking del Institute for Management Development) son aquellos que (como certifica la Unión Bank of Switzerland) [la Unión de Bancos Suizos] pagan los salarios más altos.

"Hoy, el campeón de la competitividad es el que añade más valor, no el que paga menos. Como lo advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su Interim Report de 1993, la reducción de

salario real estimularía las 'actividades de escaso valor añadido', convirtiéndose así en 'una trampa'.

"El empleo no se crea por ley [se guía este autorizado economista]. Ni por ley liberal ni por ley progresista. Para abrir millones de puestos de trabajo se necesita una estrategia de crecimiento, y no hay crecimiento sin mercado que lo absorba. Crear o detectar demanda y adaptar la producción para satisfacerla: eso es lo que debemos hacer.

"No es tarea fácil. No puede hacerla el sector privado solo. No puede hacerla el Estado solo. Hace falta una sociedad entre ambos. No sigamos perdiendo el tiempo: armemos, cuanto antes, esa sociedad y dejemos de pensar que la flexibilidad laboral es la respuesta a estos temas de la economía." (*Risas*.)

Sí, ríanse. Esto fue dicho por Rodolfo Terragno, jefe de Gabinete de Ministros del actual gobierno de la Nación.

Estoy totalmente de acuerdo con este enfoque del doctor Terragno. Lamento que como jefe de Gabinete no haya tenido esta misma posición cuando nos envió este proyecto de ley, en cuya confección ha participado.

¿Qué pasa si además de leer las expresiones de Terragno paso revista al debate de la Cámara de Diputados?

El debate en la Cámara de Diputados fue muy esclarecedor, señor presidente. Hablaron importantes dirigentes de la Alianza, como Enrique Martínez y Beatriz Nofal, que se equivocó, porque intentó hacer una defensa de la ley y lo único que logró es que le salieran al cruce media docena de diputados de su partido, pues sostenía que esta norma iba a provocar rebaja de salarios en el interior del país y que esa rebaja de salarios a nivel de empresas iba a afectar toda la pirámide salarial y la competitividad de la economía.

Y me voy a referir a lo que dijo el diputado Enrique Martínez al leer un documento del Banco Mundial al que tuvo acceso. El diputado Enrique Martínez decía: "Lo que sucede es que nadie genera empleo reduciendo los salarios. Ese objetivo—de bajar los salarios—no podía quedar explícito en el texto, no para contrabandear la idea, sino porque era absolutamente impráctico generar condiciones que permitieran la negocia-

ción del convenio colectivo hacia la baja y hacer explícito que ése era un objetivo de superior política económica".

Y citando el informe del Banco Mundial también señalaba el diputado Martínez: "¿Por dónde empezar?"—refiriéndose a la lucha contra la pobreza—. Y continúa: "1) Mercado de trabajo. Habría que facilitar un funcionamiento más ordenado del mercado laboral mediante algunas reformas. Eliminar las negociaciones colectivas o sectoriales de trabajo, que hoy son extensivas a todos los trabajadores de un sector, y que tienen validez incluso después de haber expirado. Bajar el costo de la mano de obra, reduciendo los beneficios extras y las indemnizaciones por despido, e introduciendo un sistema de seguro de desempleo basado en cuentas individuales. Permitir empleos temporarios que no estén sujetos a impuestos o de nómina, como las modalidades promovidas, pero que cuenten con beneficios sociales de salud y jubilación".

Estas palabras, cuya paternidad le corresponde al diputado Martínez, constituyen el meollo de la cuestión que hoy estamos considerando aquí. Esta idea de querer bajar los salarios, y de utilizarlos como variable de ajuste, no es nueva en la historia de la humanidad. Fíjense que ya en 1747 J. Smith decía: "Es un hecho bien conocido que el obrero que puede subvenir a sus necesidades trabajando tres días de cada siete estará ocioso y borracho el resto de la semana... Los pobres no trabajarán jamás un número más alto de horas de las que precisan para alimentarse y subvenir a sus excesos semanales... Podemos decir sin temor que una reducción de los salarios en las fábricas de lana será una bendición y una ventaja para la nación y no hará un daño real a los pobres".

La idea de que el salario tiene una atracción especial para convertirse en la variable de ajuste de los programas estabilizadores de los ministros de Economía es algo permanente en la historia de la humanidad. Sólo durante la época del Estado benefactor, que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial, a través de las ideas impulsadas por Keynes, se admitió que había una diferencia entre las situaciones micro y macroeconómica.

En efecto, la visión microeconómica autoriza a pensar que una rebaja del salario puede

dar mayor utilidad al empresario. Pero si esta política de reducción de horas o del salario, que era lo que se hacía en plena crisis mundial, se extiende al conjunto de la economía, lo que se logra es el efecto inverso, porque se disminuirá la demanda y, al suceder esto, se acelera o consolida el proceso de recesión económica.

Sin embargo, yo no conozco o no sé de ninguna política económica que quiera o que procure lograr la estabilidad o impulsar el crecimiento que no comience por sostener que los salarios están altos.

Durante mucho tiempo —y ustedes lo recuerdan, porque en esto el radicalismo fue seguramente más crítico de lo que pudimos ser nosotros— se sostuvo que la economía no crece porque los salarios que los sindicatos obtienen son mayores que los aumentos de la productividad del trabajo. Entonces, ¿cómo va a crecer una economía cuando el salario es mayor que la productividad del trabajo?

Y durante mucho tiempo esto me preocupó a mí —al igual que a otros economistas que no participan del ideario ortodoxo—, porque pensaba que tenían razón. En efecto, creía que si un obrero no producía una cantidad determinada de bienes en las horas que trabajaba y se le pagaba lo mismo que si los produjera, evidentemente el país se retrasaría, aunque se beneficiaran el gremio o el trabajador en particular.

Pero tuvimos que llegar a la década del 90 para darnos cuenta de que ésta es otra de las falacias que muchas veces hemos comprado. Fíjense que durante la década del 90 el país que más aumentó la productividad del trabajo fue la Argentina. La productividad del trabajo creció a un ritmo del 6, 7 y 8 por ciento anual.

Habíamos logrado el equilibrio, pero, ¿qué es lo que la economía ortodoxa sostiene respecto de estas situaciones? Se supone que cuando aumenta la productividad del trabajo, aumentan los salarios o bajan los precios. Porque, obviamente, el empresario se está beneficiando con un desempeño mucho más eficiente del trabajador.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador José Genoud.

En la Argentina no sucedió nada de esto, señor presidente. Lo dice, con dolor, un justicialista. Durante nuestro gobierno la productividad

creció de forma gigantesca, pero no bajaron los precios ni aumentaron los salarios; a lo sumo se mantuvieron los precios. Es decir que el sector del capital se apropió de todos los beneficios que traía aparejado el aumento de la productividad, que sostuvo basado en una mucho mayor inversión —ustedes conocen el ritmo de inversiones que hubo en la década del 90— y en la propia estabilidad de la economía. Esa estabilidad hacía previsible la economía y previsible también los ingresos de los trabajadores.

Yo siempre pensé que debíamos buscar una fórmula para corregir esta situación, y considero que este proyecto de la ley, de alguna manera, abre un camino al respecto. No se puede generar un sistema de salarios vinculado a la productividad —que es lo que deberíamos hacer— sin información. Los trabajadores necesitan saber cuál es la verdadera naturaleza de la ecuación económica en la que están inmersos para poder así discutir con los patrones los aumentos o regulaciones de salarios teniendo en cuenta los niveles de productividad.

Ahora bien, todo esto podría llevar a la conclusión —sobre todo a quienes me han escuchado en las exposiciones que formulara en oportunidad de la visita de los ministros del Poder Ejecutivo y de los representantes de ambas CGT— de que me voy a pronunciar en contra de este proyecto de ley.

Mis compañeros saben que voy a votar por este proyecto, por dos o tres razones. La principal se debe a que siempre me ha animado un estricto espíritu de disciplina partidaria. Soy leal a la tarea de mi bloque, y sobre todo, a la de los compañeros que tuvieron a su cargo en estos largos días llevar adelante estas negociaciones, a quienes públicamente felicito por el grado de idoneidad que han mostrado en esta difícil tarea. Por eso voy a votar por este proyecto.

Pero también, en segundo lugar, lo voy a apoyar porque lo hemos modificado con respecto al proyecto enviado por la Cámara de Diputados; y creo que lo hemos modificado no tan sensiblemente como yo hubiese esperado, pero sí de una forma bastante sustancial. Estamos eliminando el efecto perverso de la rebaja de los salarios; mantenemos el principio de la norma más favorable al trabajador; permitimos la renovación de los convenios colectivos sin que los trabajadores pierdan sus derechos; incorpora-

mos la obligación de brindar información sobre la negociación colectiva, lo cual puede constituir una verdadera revolución en el campo de las relaciones del trabajo, porque colocamos al trabajador en un pie de igualdad con el empresario para decidir cuestiones de la empresa, y transformamos la flexibilización laboral no en un sistema para degradar y precarizar el trabajo sino para que el trabajador se inserte de una forma moderna y funcional en la actividad de la empresa. Asimismo, hemos incluido un subsidio para estimular el empleo de mayores de 45 años, menores de 24 años y mujeres jefas de hogar.

En tercer lugar, voy a apoyar este proyecto porque creo que hemos hecho un estimulante ejercicio de consenso. Y yo vengo insistiendo en que si en la sociedad argentina no se dan niveles mínimos de consenso va a ser más difícil recuperar o instalar un proceso dinámico de desarrollo económico, de justicia y de equidad social. Combinar estos dos factores es difícil; constituye una tarea arquitectónica. Es algo que no puede ser librado al mercado sino que, por el contrario, debe responder a un cierto nivel de consenso o negociación.

Considero que justamente la respuesta válida es pensar en un nuevo contrato social; en un pacto social al estilo del llevado a cabo en España, al que cito como uno de los modelos existentes.

En la Argentina hemos tenido algunos modelos exitosos y otros que no lo fueron. En mi larga vida pública, recuerdo haber visto por lo menos el fracaso de tres o cuatro consensos sociales. Claro: eran épocas en las que tal vez no existía la madurez política que hoy deduzco como consecuencia de este consenso.

De manera que por estas tres razones —porque quiero mantener mi tradicional posición en orden a preservar la unidad de mi bloque; porque creo que esta ley corregida es muy superior a la que recibimos de la Cámara de Diputados y resguarda los intereses de los trabajadores, aunque no de una manera total o integral, como tal vez hubieran querido o quieren los dirigentes gremiales, algún sector, por lo menos; y tercero, porque hemos hecho un saludable ejercicio de consenso— voy a dar mi voto afirmativo.

¡Ojalá podamos profundizar este ejercicio de consenso en los tiempos que se avecinan!

Nada más, señor presidente. *(¡Muy bien, muy bien!)*

**Sr. Presidente** (Genoud). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis del bloque Justicialista.

**Sr. Sergnese**. — Gracias, señor presidente.

También voy a tratar de ser muy breve porque pareciera existir un gran consenso para tratar rápidamente este proyecto de ley. Pero sin perjuicio de ello, voy a realizar brevemente algunas consideraciones sobre cómo hemos llegado a esta oportunidad en la que el Senado de la Nación está considerando este proyecto de ley.

No voy a traer a colación todo el debate llevado a cabo en la Cámara de Diputados antes de dar su sanción porque los integrantes o representantes del bloque Justicialista al final, en el último minuto, no dieron su voto afirmativo. Y para conocer lo que pensaban sobre este tema los diputados nacionales radicales o de la Alianza, necesariamente tendré que remitirme a la versión taquigráfica del debate.

No voy a repetir lo que ya mencionaron otros señores senadores —dos, para ser preciso— con respecto al pensamiento de los diputados nacionales de la Alianza. Pero sí me voy a referir expresamente a lo manifestado en aquella oportunidad por la señora Castro, diputada del Frepaso: “Como ya se ha expresado y entendido, este es un proyecto de ley que no genera empleo sino que mejoraría la empleabilidad. ¿Qué se entiende por empleabilidad? Para los organismos multilaterales de crédito la receta es sencilla: rebajar los salarios, precarizar las condiciones laborales, atomizar la negociación colectiva, individualizar las relaciones del trabajo, precarizar los ámbitos colectivos sociales que defienden solidariamente su derecho, y por último, seguir sosteniendo que el costo laboral es el responsable de que no haya productividad o competitividad en un país o en determinada industria. Esta receta fracasó, señor presidente. Algunos que antes la apoyaron —como recién lo mencionaban dos diputados— probablemente estén hoy en condiciones de reconocer que se equivocaron y que este no era el modo de generar empleo”.

Y luego en un párrafo dijo: “Los argentinos trabajan en promedio entre tres y cinco horas diarias más que en Europa y los Estados Unidos, y reciben un salario laboral mensual y anual entre 3 y 5 veces menor que en los países centrales. Trabajamos una hora más por día que en México, Venezuela y Japón, y media hora más por día que en Singapur y Corea”.

Se sancionó en Diputados y llega la ley al Senado. Y yo creo que aquí ha habido un gran trabajo por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Se convocó a una serie de reuniones para tratar de clarificar y entender qué era lo que se iba a considerar. Y así se invitó, por ejemplo, a los ministros de Economía y de Trabajo. Se invitó a gremialistas de las dos CGT y a presidentes de las pymes. Traté de participar de varias de esas reuniones.

Escuché atentamente las diferentes exposiciones. Y en una de esas reuniones, en la que estuvo el ministro de Economía, escuché a un senador de la Alianza —a quien respeto— decir lo siguiente: “Yo estaba pensando que todos quienes estamos aquí queremos lo mejor para nuestro país pero que todos juntos no podemos crear, por la absoluta desnacionalización en que vive la Argentina, políticas al servicio de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestros productores. Es decir, este debate es producto de una gran crisis estructurada internacionalmente por los grandes poderes.

“Aquí estamos dependiendo del Fondo —de si nos prestan o no—, no funciona el banco nacional, producimos mal, hay déficit en los valores que hacen al funcionamiento de la sociedad, cayó nuestra educación. Es decir, de golpe San Martín nos liberó y ahora el Fondo Monetario nos vuelve a transformar en una colonia de muchas actitudes que nos fastidian. Y esto porque es un hecho civilizado. Pero, de todas maneras, creo que en el fondo estamos hablando de cosas que no podemos controlar auténticamente y entonces no nos entendemos. Yo veo así este debate”.

La verdad, a mí quizás me cuesta entender los temas un poco más que a los otros, por eso trato de cubrir esa diferencia con horas de lectura y con poner un poco más de atención; leer dos o tres veces los temas. Y si no los entiendo, los vuelvo a leer. Y hay veces en que ciertos temas necesito leerlos varias veces.

Entonces fui participando de casi todas las reuniones. Y escuché más discursos a favor en este recinto que en esas reuniones. Incluso estoy hablando de cuando vinieron los ministros nacionales. Quizás yo no entendí correctamente la forma en que se planteaban los temas.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social comenzó a trabajar y a consensuar. Y la verdad es que venía Tell al bloque y nos explicaba cómo se estaba discutiendo. Incluso en una oportunidad lo acompañé a una reunión de trabajo. Y advertí

en qué puntos, más o menos, se acercaban las posiciones, tratando de encontrar el consenso. Pero, claro, yo decía: “¡Que bien! ¡Cómo estamos avanzando, cómo estamos logrando encontrar esos puntos de equilibrio!” y a los pocos días advierto que, después, habían aparecido otros interlocutores diferentes de quienes habíamos estado en esa reunión, que no estaban de acuerdo con lo que habíamos conversado y se habían molestado. Entonces, lo que parecía un acuerdo no era tal porque, mientras no estuviera firmado, el acuerdo no existía. Había diálogos, conversaciones de absoluta buena fe porque, además, me consta que han estado trabajando muchas horas y eso implica un esfuerzo. Pero la verdad es que esto no se lograba plasmar en un dictamen que dijera que esto es lo que la Comisión de Trabajo ha resuelto por mayoría y que, a partir de ahora, todos los senadores tienen la posibilidad de conocer ese dictamen, estudiarlo, hacer aportes, decir si están dispuestos a apoyarlo o si disienten con él, es decir tomar conocimiento del dictamen y fijar posición.

Esto es lo que normalmente se debería hacer, y ya lo han dicho otros senadores, con cualquier proyecto.

Cuando advertí, en dos o tres reuniones de bloque, que ese dictamen no llegaba y no lo podía leer, manifesté expresamente en ese ámbito que pretendía decir cuál iba a ser mi posición —quizás ingenuamente— después de que me mostraran el dictamen y lo pudiera leer dos o tres veces. Pasó una semana más. Se hablaba de consenso. El dictamen seguía sin aparecer. Volví a decir que quería fijar posición recién después de conocerlo. Entonces me dijeron que, en unos días más, iba a estar el dictamen, que lo iba a poder leer y, por supuesto, resolver o decidir al respecto.

Como me quedaron algunas dudas acerca de si me habían entendido, me reuní con los trabajadores de mi provincia, con todos los gremialistas que integran los dos sectores en que están divididos a nivel nacional. Conversamos, escuchamos, conocimos en profundidad la posición de todo el gremialismo y coincidieron prácticamente, a pesar de su distinta alineación. Repetí en presencia de los gremialistas que no había resuelto, no había fijado posición y que no lo podía hacer hasta que no conociera el dictamen, que si el dictamen tenía realmente un consenso y no afectaba los derechos del trabajador, si efectivamente no ha-

bía disminución salarial y la modificación de los convenios menores no afectaba derechos adquiridos, en realidad, en relación a las dos o tres normas de la ley que se están discutiendo, yo iba a votar en el sentido del consenso.

La semana pasada, cuando lamentablemente el martes a la noche se produjeron algunos hechos de extrema violencia, esto se discutió nuevamente en mi bloque y decidimos no bajar a sesionar porque, en verdad, las escenas que vimos nos mostraban que no era el momento propicio, oportuno. Pero nuevamente, en esa oportunidad, pedí el dictamen. Creo que si ese día no se hubiesen producido los hechos de violencia, se habría planteado el tema como hoy, con el dictamen unos minutos antes de la sesión.

Ayer, otra vez, pedí el dictamen. Y me volvieron a insistir acerca de cómo iba a votar. Dije que no sabía cómo iba a votar si no conocía el dictamen.

Esto parece una anécdota, un chiste. Volví a expresar que quería conocer el dictamen de la comisión. Insistí en el tema. Yo trato de ser disciplinado, aunque me cuesta. Y el dictamen no aparecía. Me consta que mi amigo Tell estaba trabajando con el ministro y con Sapia y seguramente con Alcides López. Es cierto, ha estado trabajando con ellos. Pero la verdad es que yo llegué hoy, a escasos minutos del tratamiento de este tema —varias horas después de la fijada— y en el ínterin fui varias veces al bloque para ver si estaba el dictamen. Como luego de ir tres veces y varias horas después de la hora fijada no estaba aún el dictamen, volví a reiterar esto en el bloque. Entonces hice una manifestación pública en el sentido de que iba a votar por el rechazo, en general y en particular. Y ahora ratifico esta posición. Me quedé pensando que no debía hacer mención a algunos temas porque he advertido que el señor presidente de la bancada de la Alianza dijo que se iban a remitir a lo que plantea el senador López, que es el que ha estado trabajando y al que le tienen una gran confianza. Los felicito por eso. Yo también le tengo una gran confianza y es mi amigo el señor senador Tell, al igual que el señor presidente de mi bloque, pero me cuesta, a pesar de todo el esfuerzo que hago, tener que votar un proyecto sin conocerlo. Me cuesta y me resisto.

Pero, además, cuando ocurren estas cosas, me acuerdo de ciertos libros que por ahí sacábamos de la biblioteca y, en este caso, de uno

que ahora ha sido reeditado en una nueva novela, cuyo título es *Las cuarenta y ocho leyes del poder*, de Robert Greene. La número tres dice: "Disimule sus intenciones: desconcierte a la gente y manténgala en la mayor ignorancia posible, sin revelar nunca el propósito de sus acciones. Si no tienen la menor idea de qué es lo que usted quiere lograr, les resultará imposible preparar una defensa. Condúzcalos por el camino de las falsas suposiciones, envuélvalos en una nube de humo y verá que, cuando al fin caigan en la cuenta de las verdaderas intenciones de usted, ya será tarde para ellos".

No quiero pensar en esto. Quiero pensar que el hecho de no llegar al conocimiento y al convencimiento pleno de las cosas no tiene nada que ver con estas máximas del poder. Es un libro muy nuevo, hace pocos días que está en las librerías y nadie debe haber pensado en esto. Pero la verdad es que tampoco me trago, acepto o creo que se esté haciendo todo esto porque se quiere mejorar la competitividad, lo que no se logrará con la reducción de los salarios de los trabajadores.

Sin perjuicio de que esto es una norma que está prevista en el artículo 14 bis de la Constitución, evidentemente, debe haber otra razón u otro motivo para esta iniciativa.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, licenciado Carlos Alvarez.

**Sr. Sergnese.** — Cuando hablamos y discutimos la ultraactividad, ¿qué sucede? Quizás no nos gustan los interlocutores, los gremialistas actuales y necesitamos nuevos gremialistas...

**Sr. Presidente.** — Senador Sergnese: el señor senador Pardo le solicita una interrupción. ¿La concede?

**Sr. Sergnese.** — Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Pardo.

**Sr. Pardo.** — Señor presidente: quiero destacar al señor senador Sergnese, con quien tengo una muy buena relación y lo considero un amigo, que no puedo permitir, al menos en lo que a mí me toca, que se me ponga en el papel de opa o de idiota.

Quiero destacar que el bloque Justicialista ha estado informado minuto a minuto de las negociaciones, tanto por parte del señor presidente de la bancada justicialista como por parte del

señor presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, senador Tell. Además, deseo destacar que ayer fui testigo, en el momento en que se ultimaban las negociaciones y cuando aún no estaban cerradas porque se seguía debatiendo con los representantes del Ministerio de Economía y de la Alianza, de que al señor senador Sergnese se lo invitó a participar de la discusión y negociación de todos y cada uno de los puntos en los que arribamos a un consenso.

Quiero destacar esto puesto que no puedo pasar por alto que acá se insinúe que hubo algo oculto. El bloque Justicialista estuvo informado minuto a minuto y el señor senador Sergnese, mi amigo, fue invitado especialmente a participar de la discusión y negociación de este tema.

Entonces, quiero resaltarlo para que los demás bloques y la opinión pública no crean que acá esto se manejó entre una o dos personas y el resto somos un rebaño de ovejas que continuamos los dictados de un mandamás. No es así. Yo, al menos, he participado de todos los temas. Los senadores tuvimos conocimiento minuto a minuto de lo que pasaba. Perdóneme el compañero Sergnese, pero es exagerado lo que ha dicho.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Sergnese.** — Es cierto que fui invitado a participar en la reunión de anoche, en la que tampoco definieron los temas porque hasta las cinco de la tarde todavía no se habían puesto de acuerdo. Es cierto que la mayoría ha hecho un gran esfuerzo para tratar de seguir minuto a minuto esta negociación. Incluso merece una explicación porque el senador Cafiero ha mencionado que él tiene una conducta partidaria y por eso debe aceptar. Y yo respeto sinceramente a todos mis compañeros, pero quizás necesite un poco más de tiempo que los otros para entenderlo. No critico a los otros; quizás me falta esa capacidad.

Le pido a mi bloque que estos pequeños temas, como los laborales, no se traten más así, sobre tablas, con esta forma tan imperiosa, y si alguno de nosotros no está dispuesto a dar la autorización previa para la negociación, se nos empiezan a hacer insinuaciones o planteos agraviantes. Seguramente, lo que yo he dicho ha molestado a algunos. Si es así, les pido disculpas. Pero asimismo les digo que las cosas que también se dicen ofenden a los otros. En

estos temas hay un camino de doble vía, donde si no queremos agraviarnos, nos tenemos que dar todos los tiempos necesarios para saber exactamente lo que cada uno de nosotros está haciendo. Cada uno sabrá si con el tiempo que tuvo le alcanzó y fue suficiente. Yo los felicito; a mí me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para hacerlo.

Iba a mencionar una breve diferencia entre los dictámenes. Esto no es fácil de entender porque se cambia el primer párrafo, el segundo. Tengo que hacerlo aquí en el recinto. Hago el esfuerzo, pero si para sentirme contenido por mi bloque tengo, permanentemente, que actuar de esta forma, me voy de acá. Cada uno sabrá lo que hace, cada uno es dueño de sus actos. Pero yo en todas las leyes quiero actuar con responsabilidad intelectual. Es una responsabilidad mía; que cada uno asuma la propia, no lo cuestiono. Pero yo necesito tiempo, quiero leerlo tranquilo, quiero dar mi voto con total seguridad de lo que estoy votando. Como en este momento no tengo esa total seguridad, voy a votar en contra, por la negativa en general y en particular.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Villaverde.** — Señor presidente: yo también soy de aquellos que acompañan por distintas razones y una de ellas es la disciplina partidaria. Lo hago también, habiendo necesitado —como el senador por San Luis— más tiempo. Pero tuve oportunidad de estar en las reuniones aunque la discusión final fue cercana a la sesión. Y lo hago también porque el presidente de mi partido provincial (ex candidato a presidente) —que mantuvo una reunión hace escasas cuarenta y ocho o setenta y dos horas con el presidente de la Nación— y éste le aseguró que de ninguna manera se iban a rebajar los salarios. Esto fue hecho público. Creemos también en la honorabilidad del señor presidente. Pero fundamentalmente voy a acompañar por las modificaciones realizadas. Y quiero hacer un reconocimiento también expreso a los compañeros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, especialmente a su presidente, que viene haciendo un esfuerzo muy grande para llegar a esta instancia. No es verdad, como se dijo acá, que hoy sea un día de alegría. A todos nos queda un sabor amargo, más allá de que estemos conformes con las modificaciones realizadas.

Si no fuera así, tal vez muchos de mis colegas, inclusive de la Alianza, habrían pronunciado expresiones que avalaran esto. Quizá no deberíamos haber llegado a esta instancia para modificar este proyecto de ley que viene en revisión de la Cámara de Diputados. Tal como fue pergeñado originariamente y como llegó de la Cámara de Diputados no tenía un objetivo claro; por el contrario, no permitía el consenso ni las coincidencias.

Además, quiero resaltar algo muy lamentable. Llegamos a esta instancia después de una gran confrontación. Estas coincidencias se tendrían que haber logrado tiempo atrás. Estas son las causas por las cuales nosotros no estábamos de acuerdo. Queda muy claro que este proyecto no genera empleo, no genera trabajo y esto surge en forma unánime de todos los actores de las relaciones laborales.

En este Senado se recibió a los representantes de las distintas expresiones de los trabajadores: CGT, CGT disidente, CTA, representantes de la Unión Industrial, de las pymes. Los ministros de la Nación, tanto el de Trabajo como el de Economía, coincidieron en que no generaba empleo. En consecuencia, nosotros nos preguntábamos ante el compromiso del ministro de Economía si este proyecto no debería ir acompañado por otras medidas. Queríamos saber—queremos saber—, para acompañarlas, ¿cuáles son esas otras medidas? Se desconocen. ¿Cuál es la importancia del proyecto? Se desconoce. ¿Cuál es la prioridad del proyecto? Se desconoce. ¿Cuál es la insistencia para este proyecto? Se desconoce. ¿Cuál es la razón de este misterio? Se desconoce. Por lo tanto, señor presidente, que quede en claro que no genera empleo, no genera trabajo. Pero quizás lo que más nos duele, ese sabor amargo que yo digo, es que es un proyecto altamente conflictivo. ¿Por qué? Porque se instaló en el seno de la sociedad una confrontación. Primero: gobierno con sindicalistas, a través de la difusión de encuestas con la buena imagen del Presidente y la no buena imagen de algunos compañeros sindicalistas. Luego hubo acuerdos del gobierno con el mismo sector del sindicalismo, lo que trajo una confrontación con otro sector que produjo un quiebre, dentro del sindicalismo. Esto es público. Más confrontación: sindicalistas versus sindicalistas. El ministro Machinea, cuando estaba en el exterior, dijo: “El Senado está dormido, mirando para otro lado”. Esto es confrontación.

Es muy difícil lograr el consenso. El ministro de Trabajo dijo: “El gobierno no le tiene miedo a la CGT”. Acá no hay que tener miedo para consensuar. El ministro de Trabajo dijo: “Los senadores del PJ no tienen legitimidad porque no fueron elegidos directamente por la gente”. Es inconcebible que el ministro no conozca la Constitución Nacional. Creo, con el mayor respeto, que ese es un acto de provocación, no es un acto de la democracia. Por eso era muy difícil lograr consenso. Estas son las malas conductas que nos trababan cuando intentábamos lograr el consenso.

Sé que los senadores de la Alianza querían buscar ese consenso pero no los acompañaban los funcionarios. También existía confrontación entre los mismos diputados de la Alianza. Como decía recién mi colega del justicialismo por mi provincia, hubo diputados de la Alianza que fueron muy claros en esto que nosotros veníamos diciendo; me refiero a la rebaja de salarios.

La diputada Nofal dijo que era lógico, que hasta era importante la baja de los salarios, que no podía ganar lo mismo un trabajador de la Capital Federal que otro de La Quiaca, de Resistencia o de otro punto del país, en respuesta a la diputada Castro, del Frepaso, integrante de la Alianza. Más confrontación. Otra diputada de la Alianza, la diputada Carrió, expresó que debería decirle a los obreros del Chaco que ganarán sueldos por debajo del piso salarial, porque ahora el modelo de concentración económica está legalizado.

Esto trajo más confrontación. Por lo tanto lo de la rebaja salarial no fue un invento nuestro. El actual ministro de Defensa, destacado economista, dijo en la campaña que había que bajar los salarios. Reitero, eso no fue un invento nuestro.

Ese fue el motivo por el cual decíamos que había necesidad de preservar el salario, por ello votaron en contra los diputados del socialismo, algunos del Frepaso y de la Unión Cívica Radical—todos integrantes de la Alianza—. Más confrontación.

Y quiero leer algo que dijo Gustavo Caraballo, ex secretario técnico de Juan Perón y ex director de la Fundación Carlos Auyero: “La tercera vía que pretendíamos construir desde la Alianza estará francamente en retirada y se habrá consolidado el modelo cuyo cambio [desde la Alianza] pretendíamos. La medida apunta a convertir a los sindicatos en escritorios dependientes de la



oficina de personal de las empresas y posibilitar una baja salarial...". A esta reforma, más que reforma habría que llamarla contrarreforma.

Un hombre de la Alianza, sindicalista, como Víctor De Gennaro, dice: "Este proyecto legaliza por primera vez que un convenio contemple peores condiciones de trabajo y salarios que el piso legal". Más confrontación.

Lamentablemente, aquí la confrontación surgió a través de una confrontación mediática.

Nos habíamos comprometido a una confrontación de ideas; será para el próximo proyecto. Nos lo debemos. Por eso queríamos una cláusula de sinceramiento, de honestidad, una cláusula ética ya que, como decía mi compañero por la provincia de Entre Ríos, venimos escuchando clases y lecciones de ética durante muchas sesiones; todo lo que trae este tipo de confrontación no conduce a buen destino.

Las modificaciones que se realizaron cambian algunas cuestiones, introducen otras y fundamentalmente un compromiso formal para no rebajar los salarios. También se modifica el arbitraje obligatorio que, sin ninguna duda, es inconstitucional, reconocido en este Senado por abogados de la Unión Industrial, profesores de derecho laboral. Eso se corrigió y además se preservó—algo muy importante—la cláusula más favorable al trabajador.

Considero que se ha cambiado el espíritu o el llamado corazón de la ley. En tal caso quería tener la seguridad—si bien confío en mis compañeros, además de haberlo leído—de que este corazón que no se iba a tocar, con esta reforma se lo operó.

El arbitraje obligatorio iba a traer más confrontación donde no la hay. También en eso nos preguntábamos por qué se incluyó.

Decimos también, como se lo dijimos oportunamente al ministro de Trabajo y ahora al presidente de la Comisión de Trabajo, que no tenemos miedo. Si piensan que consensuar y debatir es tener miedo, están equivocados.

Simplemente queremos tomar previsiones y dejarlas escritas. Tenemos motivos. En la campaña se dijo que no se iban a aumentar los impuestos y la primera medida fue el impuestazo. Hoy está en juego la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, no tenemos miedo. Si la intención fue cambiar el modelo sindical, les decimos que en tal caso hay que cam-

biar el modelo económico. Hay que preservar, defender y consolidar los derechos de los trabajadores. Por las razones expuestas al principio de mi exposición voy a acompañar este proyecto. Lo hicimos público; se lo dijimos al presidente de la Nación.

Vamos a trabajar y a acompañar iniciativas que tiendan al crecimiento económico, al desarrollo humano, a la justicia social y a la equitativa distribución de la riqueza.

Nuestros colegas de la Alianza hablaban de la inequidad. Entonces es lógico que trabajemos por una mejor distribución de la riqueza y que nunca más un proyecto de estas características genere confrontación y desavenencias, como las ha habido en los propios bloques de este Senado. Queremos, fundamentalmente, que se preserve la paz de la comunidad y la justicia social.

**Sr. Presidente.** — El senador Alasino perdió la posibilidad de hablar porque no está...

**Sr. Verna.** — Es irremplazable... (*Risas.*)

**Sr. Presidente.** — Ah, bueno...

—Ingresa en el recinto el señor senador Alasino.

**Sr. Ulloa.** — Señor presidente...

**Sr. Presidente.** — Senador Ulloa: ¿usted quería plantear alguna aclaración?

**Sr. Ulloa.** — Simplemente quería dejar constancia de que voy a votar afirmativamente esta ley. Como de alguna forma está flotando la idea de que se vota a ciegas, quiero decir que, a pesar de constituir un bloque único, he podido seguir de cerca el tema. He asistido a todas las reuniones, a las audiencias públicas de la Comisión de Trabajo y he estudiado la ley y las modificaciones de último momento no fueron muy grandes. Eso me ha permitido votar a conciencia.

**Sr. Presidente.** — Senador Pardo: ¿usted quería hacer alguna aclaración?

**Sr. Pardo.** — Sí, señor presidente. El senador Alasino me ha permitido hacer una aclaración.

Nuestro bloque quiere dejar sentada ahora nuestra profunda preocupación por los sangrientos hechos que están ocurriendo en la provincia del Chaco ante la protesta de la gente por el ajuste provincial. Los datos que nos están llegando son tremendos; se habla ya de obreros muertos.

Queremos dejar sentada por ahora nuestra preocupación en el Senado.

**Sr. Presidente.** – Para cerrar la lista de oradores, tiene la palabra el senador Alasino.

**Sr. Alasino.** – Me pide una interrupción el senador Zalazar.

**Sr. Presidente.** – Para una interrupción tiene la palabra el senador Zalazar.

**Sr. Zalazar.** – Señor presidente: es para apoyar lo expresado por el senador Pardo y para contar lo que le está pasando a nuestro Chaco: también una fuerte represión de un gobierno que no hace lo que tiene que hacer para consensuar con todos los chaqueños. Es brutal la represión que el gobierno del Chaco y la policía están llevando a cabo en la Legislatura. Según las informaciones que tenemos, hay heridos de bala, de balas de goma.

Pido un repudio para los que siempre siguen persiguiendo cuando están en el gobierno.

Agradezco al presidente de mi bloque senador Alasino y al senador por Corrientes el apoyo que han pedido para el Chaco.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Alasino.

**Sr. Alasino.** – Señor presidente: quiero brevemente hacer una síntesis de los procedimientos que llevamos a cabo y del resultado.

Debo confesar que he escuchado con mucha atención los puntos de vista de los senadores de nuestro bloque y de bloques amigos. Evidentemente, frente a este tema que no es pacífico, tal vez surjan dudas hasta que podamos ver al final el resultado concreto de la aplicación de la ley.

Creo que este proceso nos llevó bastante tiempo, casi dos meses. Hubo una parte de la discusión prácticamente pública, en el Salón de Lectura. Allí escuchamos los puntos de vista de muchos sectores interesados en la vida nacional y, específicamente, en este aspecto. Luego iniciamos una serie de consultas o conferencias con distintos sectores del gobierno y con los senadores de la oposición. Creo que nuestro bloque tuvo oportunidad de ir conociendo paso a paso los movimientos que íbamos dando. Inclusive, he tenido la satisfacción de que cuando hoy conversábamos con algunos compañeros que manifestaban serias dudas frente a este proyecto, hemos podido ver que nadie se sorprendió frente a todos los temas que se plantearon –la garantía salarial, el arbitraje, la aplicación de la norma favorable al trabajador–. Porque todos los que

seguimos este trámite lo hicimos prácticamente con un conocimiento total y absoluto.

Con esto quiero concluir respecto de quien tal vez sienta que no participó o desconocía de alguna manera la propuesta final, que me permita señalar una cierta relatividad en la afirmación. Quien tuvo interés, quien quiso seguir de cerca, quien incluso quiso participar en la redacción de la letra chica tanto ayer como hoy, tuvo oportunidad de hacerlo. Muchos senadores lo hicieron; inclusive participando como oyentes en algunas discusiones parciales que interesaban a cada uno en particular.

Debo decir también que este bloque ha transitado una línea muy delgada, pero creo que es sumamente respetuosa de la institución democrática, del rol de la oposición y muy firme en nuestra condición de peronistas.

Nosotros hemos hecho una larga discusión. Intentamos introducir e introdujimos modificaciones al proyecto, porque evidentemente nuestro corazón de peronistas nos hacía decir que algunas de las cosas de la ley no podíamos tolerarlas, no porque a priori creyéramos que teníamos la verdad sino porque además de tener nuestra ideología, a lo largo de la historia hemos visto caminar y transitar tantas cosas que queríamos que este gobierno no tropezara con la misma piedra, como alguna vez lo hizo nuestro gobierno.

Este sendero que recorrimos va desde reconocer la legitimidad que tiene el presidente de la Nación, a quien eligieron los argentinos, para proponer la forma en que quiere administrar el país y resolver algunos temas como éste, hasta reconocer el derecho que tenemos nosotros de dudar de que este sea el mejor sistema y de tratar de introducir las modificaciones que de alguna manera corrijan los errores del proyecto de ley. Y creo que lo hemos conseguido porque nuestro bloque siempre tuvo presente su facultad constitucional de rechazar el proyecto de ley. Pero a partir de una decisión política, hizo el esfuerzo permanente para aprobar el proyecto con algunas modificaciones. Dijimos que si lo grábamos que se atendieran nuestros reclamos, aun con reparos, íbamos a acompañar la sanción de esta norma.

No se nos escapa que la promoción del empleo estable no será posible solamente por esta ley. Dijimos al ministro de Economía en la primera reunión y al ministro de Trabajo en la segunda que los costos laborales en el costo ar-

gentino tienen una mínima expresión, que de nada vale este esfuerzo si el gobierno no corrige los costos financieros, tarifarios o impositivos. Si no se los corrige, de nada valdrá el esfuerzo que hagamos con los costos laborales.

También les dijimos que nos parecía que era bastante pobre pensar que la promoción del empleo estable simplemente se produciría porque en el cuarto o en el séptimo mes del período de prueba, ya sea de tres o de seis meses, no se cobrara el tercio de los impuestos. Nos parecía y nos sigue pareciendo que esto tal vez resulta muy irrisorio. Pero como en este tema podemos opinar y no tener la verdad, dijimos: Bueno, está bien, admitamos que esto puede ser. Pero también admitamos que algunos sectores de la población han sido castigados por la exclusión, como los trabajadores mayores de 45 años, los menores de 24 años o las mujeres jefas de hogar; entonces, ponemos algo concreto que de alguna manera promueva el empleo estable o esta norma no servirá para nada. Y esta inclusión debe ser con algo más atractivo.

Finalmente, con algunos reparos logramos que esto se introdujera en la última parte del proyecto cuando se promueve el empleo estable.

Y logramos algo más, cosas muy importantes. Primero, esta especie de subsidio a las remuneraciones que hemos establecido para aquellas pequeñas y medianas empresas que promuevan el empleo. De nada vale —vuelvo a decir lo manifestado al principio— que promovamos la baja del costo laboral si las empresas no tienen para pagar sueldos porque pagan muchos impuestos, porque deben afrontar altas tarifas o porque por los créditos o por los descubiertos deben afrontar intereses del 40 o del 50 por ciento.

En ese aspecto, respetando la norma inicial, logramos que esto se incorporara en la promoción del empleo estable. Ésta es una medida concreta. Pero avanzamos aun más. A ninguno de nosotros se nos escapa que una de las formas naturales de evadir hoy las leyes laborales se da cuando, pasándole por el costado a las organizaciones gremiales, aparecen las cooperativas de trabajo “truchas” —como se dice— y, de alguna manera, arman un esquema laboral para no cumplir con los convenios, con la ley de contrato de trabajo y con los aportes. Entonces, con esta figura de la cooperativa, que es tan cara al sentimiento de los argentinos, lo que se consigue es instalar una absoluta precariedad,

fundamentalmente en los trabajadores por temporada de nuestro país, que son muchos más de los que la gente se imagina.

Por eso, nosotros acompañamos esta primera parte de la iniciativa, aunque ya le dijimos a la Alianza que en 1995 cometimos este error, puesto que manejamos ese período de prueba, porque creemos que el Presidente, tal como lo dijo el ministro de Economía, tiene derecho a equivocarse.

Nosotros hemos admitido votar el artículo 1º y logramos que la Alianza nos acompañe en los otros artículos que, de alguna manera, pensamos que están limitando la precariedad y, sin ninguna duda, promoviendo, por lo menos, el empleo estable y el blanqueo de un gran sector de trabajadores, que por la misma crueldad del sistema quedan afuera.

Además, debo decir que cuando empezamos esta discusión, nosotros hicimos público que reclamábamos que se modificaran trece puntos del dictamen. Y, sin lugar a dudas, debo señalar que con relación a la baja de salarios, que era el tema que más nos preocupaba y contra el que veníamos luchando durante meses, por una decisión personal del presidente de la Nación, de un día para el otro, la Alianza vino, cambió su posición al respecto y comenzamos a buscar mecanismos para promover la protección contra la baja del sueldo. Y, en este sentido, desde mi punto de vista, creo que lo hemos conseguido.

En efecto, entiendo que la baja de salarios en los convenios ultraactivos está protegida durante el lapso en que se discute el nuevo convenio. Y, asimismo, también está protegida en los convenios colectivos de 1988 para adelante, para siempre, es decir que hasta que haya un nuevo convenio, puesto que aquí no hay plazo.

A su vez, creo que de una vez por todas aventamos absolutamente el fantasma de discutir salarios a la baja. Y digo esto porque de acuerdo con el artículo 25, más allá de que no está totalmente redactado de la manera en que quisiéramos —y esto lo sabe perfectamente la Alianza, porque discutimos mucho este tema—, ante la posibilidad de la discusión a la baja de un convenio vigente, se me ocurre que estando en toda su magnitud y poder el principio de la ley más favorable al trabajador, cualquier convenio a la baja será pulverizado por esta norma.

Entonces, en la hipótesis habitual que señala todo el mundo, en el sentido de que un convenio

negociado por los organismos de mayor jerarquía sea discutido a la baja, porque uno de menor jerarquía, que tiene menos poder, le discute la convención colectiva y le promueve el salario a la baja en un convenio vigente, esta situación cae, a partir de que el principio de la ley más favorable al trabajador define con toda su magnitud y plenitud qué norma se aplica.

Creo que tanto en los convenios ultraactivos como en los vigentes —en una forma directa en unos, y casi directa en otros—, la baja de salarios, o la discusión a la baja en el futuro, no es permitida por la presente norma.

Y entiendo que esto, más allá de que no se esté de acuerdo en las fórmulas, del deseo de algunos de que hubiera sido más explícita, del juego de las normas en esta ley, está impedido.

Digo esto, señor presidente, porque nuestro bloque se dispuso a votar este proyecto una vez que esto quedó absolutamente claro en la norma.

Por otra parte, bajo ningún concepto íbamos a permitir que se cuestionara, se acotara o, de alguna forma, perdiera todo su esplendor el *in dubio pro operario* en las convenciones colectivas de trabajo. Y debo reconocer en ese sentido la predisposición de los representantes de la Alianza para permitir que este principio quedara tal como se lo enuncia en la ley 14.250, sin retacear o parcializar su validez.

Otro tema de gran importancia, señor presidente, fue la cuestión del arbitraje. El arbitraje hoy es obligatorio, y este proyecto lo vuelve voluntario, en dos instancias: para el futuro, mediante el sistema de mediación que, de alguna manera, lo establece en forma definitiva también en el período de los ultraactivos; tanto en los del '73 como en los del '88 hemos acordado que sea a pedido de la parte sindical o de común acuerdo de ambas partes.

Creo que éste es un tema que nos hemos fijado como objetivo y que también hemos conseguido instrumentar.

Con respecto a los otros diez puntos que alguna vez le planteamos a la Alianza frente a los medios como condición *sine qua non* para avanzar en este dictamen, hemos hecho incorporaciones definitivas que se verán con toda magnitud en la discusión de las convenciones colectivas de trabajo que sí promueve este proyecto. Me refiero concretamente al derecho a la información, sobre el cual no me voy a extender en mérito a la precisión con que ese tema

ha sido abordado por el señor senador Cafiero; me refiero a la cuestión de la policía del trabajo. Por primera vez recuperamos el viejo derecho que tenían los dirigentes sindicales a acompañar a los inspectores del Ministerio de Trabajo en las inspecciones y poder denunciar las irregularidades que adviertan.

Por otra parte, todo este sistema de policía del trabajo es un elemento muy auspicioso, que aspira a que de la conjunción del accionar de las policías del trabajo provinciales y del Ministerio de Trabajo de la Nación surja un instrumento que permita que los trabajadores no se sientan en la más absoluta indefensión porque nadie controla las normas laborales.

Queremos introducir también nuestra preocupación por los indocumentados y por los trabajadores en negro que muchas veces son obligados a trabajar bajo un régimen de esclavitud o de siervos de la gleba. E introducimos también aquí la cuestión de todos aquellos que están, de alguna forma, limitando o conculcando el trabajo argentino indebidamente.

La facultad que le damos al Ministerio de Trabajo para tomar inmediata intervención, junto con la Dirección de Migraciones y la Aduana, para establecer las condiciones de trabajo y actuar en consecuencia, no constituye un chauvinismo político.

Estas cuestiones han aventado, de alguna forma, la preocupación que algunos senadores de mi bloque y de otras bancadas tenían frente a las cuestiones internacionales con los países vecinos y del Mercosur vinculadas con estos temas.

Evidentemente debo reconocer que en este sistema, con cierta honestidad, la ultraactividad tiene un destino. La ultraactividad, al final del sistema, termina. Pero no termina de cualquier forma: termina con otro convenio.

Se me puede decir que en algunas cosas no hay acuerdo; que en definitiva, aquello en lo que no hay acuerdo sea motivo de árbitro y que el árbitro laude. Bueno; en lo que no se acordó, el laudo integra el convenio.

Esta fue una vieja lucha sobre cómo debía terminar la ultraactividad. Termina como debe terminar: con un convenio nuevo que va a regir la actividad. De todas maneras, en los del año '88 —se arriesgaron a discutir convenios cuando los del '73 no lo hacían—, en este caso específico, alguna de las partes podrá promoverlo

para volver a discutirlo o no. Pero las condiciones salariales absolutas del convenio ultraactivo se van a mantener por los siglos de los siglos hasta que haya otro convenio.

Creo que en este y en otros aspectos hemos tratado de coordinar la ultraactividad o el fin de la ultraactividad, que de alguna manera es el fin de un sistema y un riesgo para los salarios o para las condiciones del trabajo, concluyendo con la implementación de otro convenio que resuelva condiciones de trabajo y salarios.

No es para decirlo aquí porque tal vez debamos discutirlo en otro lado, pero creo aventar cualquier duda sobre que esto conspire de alguna manera contra la organización sindical —que nosotros creemos es la mejor, respetando que la Alianza crea que no lo es—, porque hemos establecido fundamentalmente la prioridad del derecho estatutario entre los iguales.

En los problemas sindicales, de representación o de discusión de convenios, debemos saber que hay dos circunstancias distintas. Primero, a los que están organizados como unión —metalúrgicos, UOCRA, gastronómicos— este tema los roza de manera total porque tienen un mecanismo interno de definición según el cual la representación está absolutamente establecida, más allá de que por allí en esas organizaciones todavía haya seccionales que a veces sean más importantes que la central; esta es la realidad. En el caso de la federación, que debemos entender como sindicatos con personalidad gremial federados voluntariamente en una organización superior, estamos definiendo, como en el derecho estatutario, la representación interna.

Se podrá decir: Sí; tal vez alguna representación menor que quiera desagregarse, irse o desaparecer del sindicato, puede por su cuenta discutir convenios a la baja por alguna prebenda que le dé el patrón o que le dé el empresario.

Nosotros creemos que este riesgo que evidentemente existió está absolutamente acotado. ¿Por qué? Porque si el derecho estatutario no lo resuelve, la ley establece con toda precisión que internamente la organización, por sus mecanismos habituales —llámese asamblea—, debe definir la conducta. Entonces, siempre pensamos que la asamblea, que es la protección o el órgano mayor de expresión en todos los organismos colectivos que va a tener la representación de los trabajadores, de alguna manera va a definir con toda precisión quién tendrá la representación del sindicato.

Además creemos que esta ley, que está estableciendo distintos mecanismos que dan preeminencia al derecho estatutario, también prevé algo que me resulta poco creíble: que un sindicato, un orden de primer grado federado que intenta discutir a la baja un convenio vigente que discutió el órgano superior, pueda, donde está vigente, meterse dentro del convenio de una parte y bajarle los salarios.

Esto es absolutamente imposible por lo que dije al principio. Y es que creo que nadie puede admitir que frente a este caso, un convenio vigente, otro convenio menor que baje los salarios, no rija en toda su plenitud el artículo 7º de la ley 14.250.

Creo que esto no lo hemos conseguido solamente por nosotros. Un sector importante de los trabajadores se dispuso a luchar para que el dictamen, tal como vino de Diputados, tuviera aquí algún tipo de cambio.

El mérito de lo que hemos logrado radica en el hecho de que ejerciéndose el legítimo derecho a peticionar, se reclamó permanentemente en el sentido de que la sanción de Diputados iba en detrimento del sector trabajador.

Esto, sin duda, es mérito de ellos. Lo que no hemos conseguido, tal vez, sea demérito nuestro. Alguien que sabía mucho de esto decía que lo óptimo a veces es enemigo de lo bueno. A nosotros nos pareció que en estas circunstancias, si no podíamos alcanzar lo óptimo, teníamos que alcanzar lo bueno.

Creo que éste es un elemento importante. Y esta lucha, que se da en distintos frentes, será un procedimiento para ir preparando los derechos que se ejercerán —en toda su plenitud— en las nuevas circunstancias en que se desenvolverá el mundo.

Tal vez hoy no podríamos votar exactamente la ley de organizaciones gremiales de 1953, porque quizás ninguno la admitiría. Pero nuestro compromiso es dejar el camino abierto para la defensa de los derechos, o de lo que nosotros creemos que son derechos que no se deben perder.

Para terminar voy a hacer otra reflexión, con relación a ciertas preguntas que se pudieran hacer: “¿qué votaron, qué cambiaron?”

No cambiamos nada. Los trabajadores del mercado regular que estaban en la plaza, ayudaron a los informales. Dijeron que, de alguna manera, a partir de su reclamo, hoy se votaron 160 millones para planes Trabajar.

Y debo decir que durante nuestro gobierno, siempre se nos acusó de que a nosotros nos faltaba una red de contención social para la exclusión o el desempleo. Es cierto.

Nosotros nos hacíamos cargo de que era insuficiente. Pero nos dimos cuenta cuando asumió este gobierno, que si se caía eso que criticaban, no quedaba nada.

La conclusión es que aunque imperfecta, habíamos pretendido establecer una red que de alguna manera combatiera la desocupación. Y nos dimos cuenta durante más de ciento cincuenta días, de que del lado del gobierno —con todo respeto— pensaban que no existía un plan que sustituyera a los planes Trabajar.

Creo que esto que advertimos, por lo que abogamos y reclamamos, finalmente la Alianza también lo entendió. Creo que nos acompañaron en la votación porque todos sabemos que hasta que no tengamos un sistema, por lo menos hay que mantener vigente el actual, que en las provincias cada vez es más importante.

Esto es motivo de que en las provincias no tengamos todos los días hechos que después tengamos que lamentar.

Pero aun así no cambiamos, porque entendimos que las dos cosas servían. Y en este tema le auguramos éxito en la administración.

Al presidente de la Nación, que tantas veces nos pidió que respetáramos su derecho: acá está, presidente, éste es el peronismo en la oposición que, teniendo mayoría para pulverizar cualquier ley, desde diciembre viene ayudando permanentemente, aun pagando costo político. Este es el peronismo de Perón que entiende que el que pierde acompaña.

Pero téngase presente que hay dos años para ver cómo funciona esto; no está todo dicho. Lo que nosotros pedimos es que, si en un plazo determinado la Alianza advierte que esta norma no tiene resultado, hay que dejar de lado el fundamentalismo y la obcecación y corregirla.

Creo, y ésta es una íntima convicción —como lo dije al principio—, que sin duda la instrucción vino del más alto nivel para que introdujéramos las garantías salariales. Tal vez nos pasó con nuestro presidente, a veces sentíamos que los ministros, los asesores, eran mucho más fundamentalistas o, para decirlo de otra manera, mucho menos políticos que quien conducía.

Y, cuando teníamos una posición muy dura por parte de algún ministro, muy fundamentalista, o muy ortodoxa, venía quien tenía la cosmovisión política de poner límite a las cosas.

Esta es nuestra contribución a la gobernabilidad y a la posición del presidente. Se lo dejamos picando. Y le pedimos que, si esto no funciona y hay que retroceder, dé la orden para que lo corriáramos. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Galván.** — Quiero decir unas pocas palabras, señor presidente.

Acabamos de escuchar un importante discurso. Lo ponderamos y celebramos en partes esenciales, dichas por el señor presidente de la bancada de la oposición.

Me parece que nuestro silencio tendría un sentido negativo si no dijéramos algunas palabras porque esta ley, como muy pocas normas, ha pasado por el tamiz de la Cámara originaria, que es la Cámara de Diputados, por largas reuniones en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, por este debate y por un debate que se ha instalado también en la calle, en la opinión pública y en la prensa.

No es fácil, entonces, llegar a la convergencia de los intereses que aparentemente están encontrados. Sencillamente diré, señor presidente, sin ánimo de trazar balance, que este proyecto ha sido enviado al Parlamento argentino cuando hay cuatro millones de compatriotas desocupados o semiocupados, cuando hay catorce millones de argentinos que están viviendo por debajo de la línea de pobreza; además, no tenemos industria nacional, se ha convertido en hilachas la banca nacional, y tenemos poderosas limitaciones en el comercio exterior.

Debo decir brevemente, porque me lo indica el decoro, que no admitimos la gravitación, las decisiones ni el dedo señalador de los organismos internacionales. Somos un país soberano al que le corresponde, con todos los derechos y garantías, formar parte del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Pero es necesario unir las voluntades en la dignidad y el decoro de la República para ver si es posible frenar la influencia de estos poderosos centros financieros.

En medio de esta situación, culmina el debate en esta Cámara y, por eso, celebro el esfuerzo que se ha hecho.

Nosotros siempre hemos creído que el presidente De la Rúa necesitaba dotarse de un instrumento para perforar esta poderosa valla de la desocupación.

Esta ley no está hecha en contra de los sindicatos y, si bien para otros constituyó una bandera, para nosotros y nuestro gobierno no era un dogma sino una forma de tratar de parar un poco el tobogán de la decadencia argentina. Así es como se ha llegado a esta coincidencia, que celebramos.

Debo reconocer el esfuerzo que ha hecho la oposición. El señor presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con decoro y humildad, fue haciendo a través de los días la sumatoria de las voluntades, la síntesis y las pretensiones que legítimamente teníamos los unos y los otros; y como no tenemos amor propio en las cosas de la República, concedimos hasta donde pudimos. Y los otros, a los que respetamos, adquirieron lo que legítimamente reclamaban.

Esta es la ley posible. Juntamente con el señor senador Cafiero, creo que hay que profundizar la búsqueda de los comunes denominados. El país no está bien; pero no echamos culpas a nadie porque, en todo caso, somos todos responsables. Sin embargo, puede ser el punto esencial de una coincidencia fundamental y antes de adjudicarlo a alguien que podría decir que es un triunfo nuestro, porque hemos conseguido una ley siendo minoría, prefiero decir que aquellos que tienen la fuerza de los números han permitido la sanción de esta ley que, en lo posible, permitirá la búsqueda de más trabajo en la República Argentina.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Pido que la votación sea nominal o que se deje expresa constancia de mi voto negativo.

**Sr. Presidente.** — Que cada senador que vote en forma negativa deje constancia.

**Sr. Maglietti.** — Señor presidente: solicito que se inserten en el Diario de Sesiones los fundamentos de este proyecto de ley.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente:

A manera de introducción resulta conveniente referirnos al marco social dentro del cual se desenvuelve el presente debate sobre la reforma laboral.

La situación es absolutamente difícil, ya que el desempleo es el mayor enemigo que tiene la Argentina y los argentinos. De cada 100 personas que están en el mercado laboral, 3 están totalmente desocupadas, 11 subsisten con la ayuda de familiares y amigos, 12 trabajan en forma irregular y sin protección, 20 tienen un empleo regular informal e ilegal, 12 son trabajadores autónomos sin seguridad social y 40 tienen un empleo estable en blanco. De éstos, uno de cada tres trabaja jornadas superiores a la legal.

El gobierno de la Alianza se encuentra obligado a reformular, en las condiciones sociales de precariedad que surgen de los ejemplos anteriores, la legislación laboral más antiobrera de que se haya tenido conocimiento en la historia argentina y que es el resultado de las decisiones adoptadas en la materia durante los 10 últimos años.

La política del gobierno anterior se caracterizó por tener al salario del trabajador como variable de ajuste del modelo, manteniéndolo permanentemente congelado; por la reducción de aportes patronales; por la inestabilidad de la relación laboral precarizando las condiciones de trabajo; por el aumento de la jornada laboral (10, 12 y 14 horas diarias); por la eliminación de los descansos obligatorios y el fraccionamiento del régimen de vacaciones al igual que el pago del sueldo anual complementario; por la disminución del monto de las indemnizaciones legales a favor del trabajador; por el debilitamiento de la organización sindical a través del fraccionamiento de la negociación colectiva. Todo ello configuró un modelo totalmente contrario a nuestra cultura histórica en materia de derechos sociales.

Es por ello que ahora debemos encarar la reformulación de esa legislación laboral en una forma que no es la ideal, la que hubiéramos querido para legislar con la amplitud y el concepto de justicia social que la situación exige.

En el cuadro señalado debemos afirmar que no estamos analizando un proyecto de ley retrógrado ni flexibilizador, a la manera de los proyectos implantados en la última década; por el contrario, el proyecto incorpora criterios e institutos innovadores que consideramos francamente progresistas.

El proyecto se afirma en tres ejes esenciales: estimular el empleo estable, promover la negociación colectiva y fomentar la formalización del empleo.

Con relación al período de prueba, en el proyecto la institución tiene las siguientes características: a) Con relación al plazo, se redujo la propuesta realizada por el Poder Ejecutivo nacional, se aumentó el plazo con relación a la legislación vigente y respecto de los convenios vigentes, el plazo es igual o menor; b) Al establecer que las rebajas patrona-

les sólo se efectivizan luego de crearse un nuevo empleo, el trabajador pasa a costar igual que cuando está vigente el sistema regular; c) La rotación del personal, considerada fraude laboral, está sujeta a severas sanciones; d) Se excluye del período de prueba a los trabajadores temporarios, y e) Se establece una diferencia a favor de las pymes (plazo de 6 meses y de 1 año para los trabajadores calificados).

El proyecto establece un sistema de simplificación en el sistema de registro de los nuevos trabajadores, lo que significa en la práctica una rebaja en los costos empresarios estimada en el orden de los 750 millones de pesos.

El proyecto incorpora el derecho de información y consulta para los trabajadores a los efectos de la celebración de los convenios laborales.

El proyecto incorpora la prevalencia de la descentralización de la negociación colectiva del convenio.

Se procura que las economías regionales tengan, a través del acuerdo entre sus empresarios y sus trabajadores, sus propios convenios adaptados a las necesidades locales.

El proyecto no tiene por objetivo crear directamente nuevos empleos; lo que se procura es facilitar la posibilidad de que se tome mano de obra por parte de las empresas. La intención es facilitar la empleabilidad, esto es lo que vale.

El proyecto consagra la ultraactividad en forma definitiva al establecer expresamente en cualquiera de sus cláusulas la posibilidad de llevarla adelante en forma consensuada por las partes. Es decir que la ultraactividad es consecuencia de los acuerdos a que puedan llegar las partes contratantes.

No creo que el proyecto traiga como consecuencia automática la negociación colectiva hacia "la baja" en los salarios y en las condiciones laborales. Pienso que no debe ser entendido en esos términos; por el contrario, podemos mantener un cauto optimismo respecto de los resultados a obtenerse, ya que hay un aspecto que se considera un avance: la intervención de novedosos actores sociales que ocuparán lugares de importancia en la negociación descentralizada, esto es un avance en el sentido de democratizar la vida gremial, porque permite el acercamiento del trabajador de base, tener en cuenta la opinión de la comisión interna y también los intereses y necesidades de las distintas regiones.

El proyecto crea un "servicio de mediación y arbitraje" que es una innovación progresista y que estará integrado por gente especializada que actuará con un criterio experto técnico-social. Su aporte puede resultar importante en todo el proceso de las negociaciones colectivas.

Otra garantía contemplada en el proyecto es la de las sanciones que pesan sobre las partes, en especial para aquellos empresarios que no negocian de buena fe. El mecanismo tiene ahora un carácter institucional demasiado serio como para ser desco-

nocido y es un avance notable respecto del sistema que rige actualmente.

Otro aspecto importante del proyecto es la incorporación del instituto de la información (contar con datos sobre el estado económico de la empresa, los niveles de empleo de la actividad, las dificultades por las que se atraviesan en el mercado). Este instituto que se incorpora en el proyecto es motivo en Europa de reclamos de los sindicatos para darle vida y hacerlo realidad en cada discusión.

En el proyecto se ha incorporado la posibilidad y la obligatoriedad si así lo pide el sindicato central, de su presencia en las negociaciones de nivel inferior. Esta cláusula establece un verdadero equilibrio entre el criterio de federalismo y regionalismo en la negociación por un lado y, por el otro, la necesaria presencia del sindicato central para el consejo y asesoramiento en la negociación.

En síntesis, la nueva legislación incorpora criterios totalmente distintos: la promoción del empleo estable a través del incentivo al empresario que efectivamente realmente al trabajador no responde a la misma filosofía precarizadora que estuvo vigente; la promoción del empleo registrado, mediante la simplificación de los procedimientos de los registros, significará en la práctica un aporte al sistema de la seguridad social; el fortalecimiento del papel del Estado, a través de las funciones de policía de trabajo y de control de la legalidad de las negociaciones; la descentralización de la negociación colectiva para poder abarcar la nueva realidad de las regiones y propiciar la aparición de nuevos actores en las negociaciones.

A fuer de sinceros, el problema del desempleo en la Argentina tiene un carácter de alta complejidad, ya que en el mismo influyen factores de distinta naturaleza, razón por la cual su solución no dependerá exclusivamente de las reformas que proyectemos. Ninguna ley, por sí misma, genera empleo y este proyecto no es la excepción; no debemos equivocarnos y creer que el proyecto tenga "la varita mágica" de toda solución.

Debemos afirmar que, ineludiblemente, este proyecto de ley de reforma laboral debe ser complementado por otros cambios fundamentales que apunten a modificar las políticas heredadas del modelo anterior. En ese sentido, deberemos legislar para eliminar todas aquellas medidas subsistentes que afectan al mercado laboral y para promover urgentemente las posibilidades de una reactivación económica.

Sólo en ese marco general de reactivación del mercado interno podremos dar con éxito una batalla definitiva contra el desempleo en la Argentina.

*Alberto R. Maglietti.*

**Sr. Maya.** — Señor presidente: quiero ratificar mi voto negativo tanto en general como en particular. Pido que quede constancia.

**Sr. Presidente.** — Así se hará.



**Sr. Varizat.** — Señor presidente: pido que quede constancia de mi voto negativo.

**Sr. Presidente.** — Quedará constancia.

**Sr. Altuna.** — Señor presidente: solicito que se inserte el discurso que tenía preparado sobre este tema.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente:

En enero de este año el Poder Ejecutivo nacional presentó un proyecto de reforma laboral que merece ser apoyado.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados, constituye un instrumento pertinente para la concreción del objetivo de aumentar el nivel de empleo al tiempo de introducir los incentivos necesarios para reducir la informalidad y precariedad del mismo.

Somos 37 millones de argentinos y la población económicamente activa llega a las 15.840.000 personas. A causa del desempleo, existen más de 2 millones de personas que se encuentran en un estado de indefensión y vulnerabilidad tanto económica como social.

La disminución de la demanda de trabajadores tiene componentes estructurales que influyen de manera decisiva en el cambio de largo plazo en el funcionamiento del mercado laboral y componentes cíclicos que pueden tener un alto poder explicativo de la coyuntura reciente.

Sin duda, uno de los componentes estructurales que afectaron y afectan la caída de la demanda de trabajo es el sistema de relaciones laborales actualmente vigente. El mismo ha contribuido a desalentar la demanda de trabajadores. Las características de la normativa y la práctica laboral explican en una medida considerable el lento crecimiento del empleo en el largo plazo.

Así, el gobierno considera necesario modificar el marco legal y regulatorio del mercado laboral, para promover su adaptación a los patrones cambiantes de demanda y producción y crear los incentivos para reducir la informalidad y precariedad del empleo.

Es cierto que por ley no se crean puestos de trabajo, pero también es cierto que un marco legal que genere las condiciones necesarias, puede ayudar a crearlo.

El proyecto de reforma laboral en consideración impulsa, entre otros puntos:

1. La simplificación de los trámites de registración de las altas laborales (Título V).

2. Rebaja de las contribuciones patronales para los aumentos de la dotación (Título I, artículo 2º).

3. Extensión del período de prueba de 30 días a 3 meses, extensible a 6 meses y con un régimen especial para las pequeñas empresas (6 meses extensible a 12) (Título I, artículo 1º)

4. La descentralización de las negociaciones laborales con predominancia legal de los contratos a nivel de empresas sobre los acuerdos a nivel sectorial (Título II).

5. La eliminación gradual en un período de 2 años de la cláusula de "ultraactividad" que extiende indefinidamente los contratos en la ausencia de acuerdo de partes o de un nuevo contrato (Título II)

6. La creación de servicios de arbitraje y mediación (Título IV).

Esta reforma laboral, como instrumento integrante de un plan integral de gobierno, generará las condiciones legales y regulatorias necesarias para la solución de uno de los problemas más importantes de la Argentina. Por todos estos motivos apoyaré su sanción.

*Juan C. Altuna.*

**Sr. Sergnese.** — Señor presidente: solicito que quede constancia de mi voto por la negativa.

**Sr. Presidente.** — Quedará constancia.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: solicito la inserción de mi mensaje sobre este tema.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente:

El proyecto de reforma laboral que se pone a consideración de este Senado, ha abierto un debate sobre sus objetivos como factor para reducir el índice de desempleo que registra nuestro país, acudiendo a un fomento del empleo estable, y a la descentralización de la negociación colectiva, lo que se ha percibido como la intención política del gobierno de provocar su debilitamiento de la estructura sindical.

El proyecto que fuera aprobado en la Honorable Cámara de Diputados, que planteaba sus más destacadas innovaciones en las cuestiones relativas a la extensión del período de prueba, en la preeminencia de los sindicatos de ámbito menor sobre los de uno mayor en la negociación colectiva, y en una regulación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, produjo fuertes reacciones, que llegaron al extremo de lamentables episodios de violencia.

La voluntad de proveer del instrumento legal que pretende el gobierno, ha movido a tratar de alcanzar los mayores grados de consenso y así el resultado es el dictamen producido por la Comisión de Legislación Laboral, que ha introducido diversos cambios. Quizá referirse en detalle a cada uno de los puntos incorporados y de qué manera significan una mejora del proyecto con media sanción sea mejor expuesta por el senador Tell como miembro informante.

Por ello considero que nuestra reflexión deba referirse a si con esta ley se cumplen con los principios sociales de protección del trabajador y, de no

contradecirlos, otorgar un voto de confianza a esta iniciativa, en el marco de los consensos alcanzados, en el sentido de que constituirá un instrumento idóneo para favorecer la creación de empleos.

En este sentido el trabajo es el medio de que dispone el hombre para satisfacer sus necesidades y las de su familia, y así alcanzar su plenitud. Es a través del trabajo que el hombre se realiza como tal, en tanto ejercita su iniciativa y desenvuelve sus cualidades, porque "Ya sea artista o artesano, obrero o campesino, todo trabajador es un creador" (*Populorum Progressio*, 27).

En sentido objetivo, el trabajo es el resultado de la actividad humana, y ese resultado el que resulta económicamente conmensurable. Así, el salario, es ante todo, el reconocimiento de la dignidad de la persona, y aquello que le es debido según la justicia y la equidad (cfr. *Mater et Magistra*, I, 34).

Estos principios básicos no siempre han sido pacíficamente admitidos. Así, el producto del trabajo se redujo a una mercancía más, que estaba en el mercado sujeta a las reglas de la oferta y la demanda, en el liberalismo industrial del siglo XIX. Hoy, el trabajo está sometido a la "globalización", que de alguna forma reactualiza ese concepto decimonónico.

Esta apertura de los mercados, pone en cuestión la regulación legal del trabajo y bajo la bandera de la competitividad se plantean nuevas reglas de juego. Así, la integración social se pone en crisis cuando la estabilidad laboral cede ante las necesidades competitivas de las empresas. Las "guerras fiscales" por la radicación de inversiones vienen acompañadas de convenios de empresa más laxos. Es, pues en este contexto donde corresponde encontrar el equilibrio, ya que las demandas de mayor libertad en los regímenes jurídicos laborales, no puede significar abandonar a los trabajadores a la ley del más fuerte.

Así, la protección del trabajador no puede resignarse, en primer lugar por los claros imperativos éticos que comparte nuestra sociedad; y ya en un plano jurídico, en virtud de las disposiciones constitucionales que encarnan en la más alta jerarquía normativa esos valores compartidos.

En vista de lo dicho, y siendo que la finalidad declarada del proyecto es la de generar condiciones para la creación de empleo, valga recordar que el propio gobierno, a través de sus ministros de Economía y de Trabajo, ha reconocido que con esta reforma no se alcanza ese objetivo.

Cabe preguntarse, entonces, para qué sirve esta ley, cuál es su finalidad, qué justifica estas discusiones, puesto que parece que al único que le interesa en verdad es al gobierno.

Si se trata de modernizar el sistema de negociaciones colectivas, por qué no recurrir a una adecuada regulación basada en un amplio consenso de los interesados, y no al emparchamiento, que además de poner a la Argentina al borde de incumplir sus

compromisos con la OIT, ha disparado enfrentamientos y reacciones en el movimiento obrero, generando incertidumbre entre los trabajadores acerca de los reales beneficios que pueden derivarse de la sanción de esta ley.

Las modificaciones introducidas en la Comisión de Asuntos Laborales de este Honorable Senado han avanzado en el sentido de darle más equilibrio al texto venido de Diputados. Queda por ver, si esta nueva versión no sólo será aceptada por la Cámara baja, sino si los agregados no serán vetados por el Poder Ejecutivo.

Con un propósito constructivo analizaremos las reformas propuestas a la luz de sus antecedentes en el Derecho nacional.

El período de prueba: El artículo 1º del proyecto nos propone la modificación del artículo 92 bis de la LCT.

El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, a excepción del contrato de trabajo caracterizado en el artículo 96 de la LCT 20.744 (texto según la ley 24.013) (se refiere a los contratos de temporada) se entiende celebrado a prueba durante los primeros tres (3) meses. Los convenios colectivos de trabajo pueden modificar dicho plazo hasta un máximo de seis (6) meses.

Si el empleador es una pequeña empresa definida por el artículo 83 de la ley 24.467, el contrato por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros seis meses. En este último caso los convenios colectivos de trabajo pueden modificar ese plazo hasta un máximo de doce (12) meses cuando se tratare de trabajadores calificados según definición que efectuarán los convenios.

En ambos casos se aplicarán las siguientes reglas: ...

El período de prueba, que se pretende que de algún modo abrirá la puerta para la incorporación de personal, como se ha visto en la práctica, dará lugar a que se lo utilice en forma perversa, sobre todo en aquellos segmentos laborales de alta rotación, que no exige calificación de la mano de obra, y especialmente en las grandes empresas, donde no pueden tener personal en negro.

Cabrá aquí recordar que en éste, como en otros muchos institutos del derecho del trabajo, su sana utilización debe estar resguardada por un adecuado control.

En este caso los criterios para apreciar el fraude laboral, al igual que los precedentes legislativos que trataron el tema, establece la presunción que se impone el inciso 1, última parte (contratación sucesiva de trabajadores a prueba para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente).

En el caso de las pequeñas empresas -definidas por el artículo 83 de la ley 24.467 como las que tienen un plantel que no supere los 40 trabajadores y tengan un determinado nivel anual de facturación- ese plazo se extiende a 6 meses, aunque por conve-

nio se puede ampliar a 12 meses para trabajadores calificados. Quizá en este caso pueda rendir mejores frutos este instituto.

De todas maneras cabe señalar que la innovación en esta figura de período de prueba es la extensión de los plazos. La extensión del período de prueba, presente en algunos convenios colectivos, fue formalmente incorporada a nuestro derecho mediante la ley 24.465, que incorporó el artículo 92 bis, y estableciendo un período de prueba por tres meses, con la posibilidad de ampliarlo a seis meses vía convenio colectivo. En este caso durante dicho período se eximía al empleador del pago de aportes a Servicio Social y Fondo Nacional del Empleo. Luego, la ley 25.013 modificó el período de prueba, reduciéndolo a treinta días.

En la legislación comparada, Brasil, al regular la indemnización por rescisión del contrato de trabajo por tiempo indeterminado, establece en el artículo 478 inciso 1 de la Consolidación de las Leyes de Trabajo que "El primer año de duración del contrato por plazo indeterminado es considerado como período de experiencia, y antes de que se complete, ninguna indemnización será debida". De tal manera, advertimos que aquí se produce una de las tantas asimetrías que acusa la relación entre los socios principales del Mercosur.

En la legislación europea, podemos citar el caso de España, que regula el llamado período de ensayo, que no se presume y que se establece en, general, por dos meses, y se extiende a seis meses para el personal técnico especializado.

Establece un régimen especial para las empresas con menos de 25 empleados, pero no puede exceder de tres meses.

Italia, el ejemplo paradigmático de desarrollo de las pymes, no lo presume. En Francia, no se establece con carácter general. En las actividades que lo han previsto, el período máximo es de un mes.

En general, se puede afirmar que en la legislación comparada, el período de prueba, aunque admitido, no se presume, tal cual lo establece la legislación nacional. Debe ser objeto de un pacto específico. Vale decir que el principio es que la contratación de un trabajador es en firme, y que sólo por pacto o convenio se puede establecer el período de prueba.

La posibilidad de extenderlo a un año la advertimos en el caso de Brasil, ejemplo relevante por las relaciones que mantiene nuestro país, y en relación a la legislación española, el período de prueba es la mitad de la que prevé el proyecto. Dentro de lo que se dio en llamar los contratos basura, el período de prueba se mostró como una modalidad de contratación más, siendo la más profusamente utilizada durante la vigencia de la ley 24.465. Esta característica del contrato a prueba se pretende estabilizar, con lo que conceptualmente se está reconociendo que im-

plica una precarización del empleo, mediante un sistema de promoción.

En este sentido el artículo 2º del proyecto señala que: El empleador que produzca un incremento neto en su nómina de trabajadores contratados por tiempo indeterminado, definido ese incremento conforme los criterios que establezca la reglamentación, gozará de una reducción de sus contribuciones a la seguridad social en relación a cada nuevo trabajador que de tal modo incremente la dotación. Esa reducción se efectivizará a partir del primer mes posterior a la finalización del período de prueba que se entenderá operada cuando ha transcurrido totalmente el plazo máximo, o cuando el empleador desista de utilizarlo en toda su extensión o parte de ella, y el trabajador continúe prestando servicios.

La reducción consiste en una exoneración parcial de las contribuciones al sistema de la seguridad social equivalente a un tercio de las contribuciones vigentes. (Sigue...)

Ante el mecanismo de esta llamada promoción del empleo estable (que en el dictamen de comisión se amplía al cincuenta por ciento de los aportes para un amplio universo de trabajadores: mayores de 45 años, menores de 24, mujeres único sustento), la pregunta que se impone es cómo será la ecuación para que, reduciendo las contribuciones a la seguridad social, precisamente no se afecte el régimen de seguridad social, su financiamiento, ni las contribuciones a obras sociales. ¿Acaso terminando en un subsidio por parte de un Estado que está promoviendo una ley de emergencia? Esta es la solución que propone el proyecto de comisión.

La negociación colectiva: Otro aspecto que toma como eje este proyecto es el de la negociación colectiva. Se pretende mediante esta reforma impulsar la descentralización de la negociación, llevándola a ámbitos de empresa y de regiones, pretendiendo a través de ello obtener un sistema más flexible que, según se dice, contemple la situación concreta en cada caso.

La demostración de que las normas vigentes en la actualidad no obstaculizan la realización de convenios que tengan en cuenta las distintas realidades del país, ya sea por actividades o por regiones, lo da el hecho de la gran cantidad de convenios de empresa que se han realizado. Por lo demás, resulta ilustrativo advertir, que la legislación vigente no ha impedido que los convenios colectivos hayan introducido normas que significan una concreta flexibilización laboral en materia de incremento del tiempo de trabajo, reducción de costos laborales y reorganización de trabajo, como es la polivalencia funcional. En rigor, las normas propuestas, además de encerrar la reiteración de normas vigentes de la ley 24.467 (artículos 101 y 102), se endereza a poner límites a la ultraactividad. Más allá de las cuestiones de coyuntura (en algunos casos la caída de la

ultraactividad del convenio implicaría que no se pudieran pactar porcentajes de aportes patronales para la actividad sindical —en este sentido, la Comisión eliminó del texto del artículo 28, introducido por el artículo 9° del proyecto—, saca del arbitraje a las contribuciones patronales), se altera el principio de ultraactividad como regla, para establecerlo como una excepción que requiere de una previsión expresa que la autorice.

Las relativas a la negociación colectiva son normas que ciertamente pueden provocar un debilitamiento en la fuerza negociadora de los sindicatos. Téngase en cuenta que en un contexto globalizador, donde cada vez es más relevante la actuación de grandes empresas multinacionales, en un contexto de un país que se debate en la necesidad de nuevos puestos de trabajo, un sometimiento de la fuerza laboral a las leyes de la oferta y la demanda es una invitación a provocar y ahondar una devaluación del nivel y calidad de vida de los argentinos.

Aquí la cuestión radica en que se pretende hacer prevalecer el convenio colectivo de ámbito menor, frente a un ulterior convenio de ámbito mayor (artículo 24) aunque el dictamen de comisión ha matizado estableciendo que esa prevalencia es mientras se encuentre vigente el primero, lo que parece razonable, en virtud del principio de “ley anterior”. La cuestión se plantea más crudamente cuando dispone que el convenio de ámbito menor prevalece sobre uno anterior de ámbito mayor (artículo 25), dejando de lado el principio de la “norma más favorable”. Aquí el dictamen de comisión ha sometido esta prevalencia a la condición de que el convenio de ámbito mayor se encontrara vencido. Aquí la pregunta es si se considera vencido un convenio que goza de ultraactividad.

Además se establece un párrafo que establece una suerte de salvaguarda contra la baja de los salarios, que por su ubicación es fácilmente vetable, pues no alteraría la economía general de la norma. Por lo demás, el efecto de preservar la masa salarial que resultare del convenio de ámbito mayor, no implica asegurar que se produzca una baja en los salarios (por caso, puedo mantener la masa salarial pagando sueldos más bajos —tener en cuenta que los mínimos de convenio usualmente son muy bajos— a mayor cantidad de empleados).

El círculo se cierra con el artículo 26, que avanza sobre los derechos adquiridos. Esta norma permite retrogradar las condiciones de trabajo mediante la consagración legislativa del principio de disponibilidad colectiva, según el cual por un convenio colectivo se pueden dejar sin efectos anteriores mínimos inderogables. Se trata, en rigor, de una *reformatio in pejus* en perjuicio del trabajador. Estas peores condiciones, en el mejor de los casos, sólo podrían ser aplicables a los trabajadores que ingresaran después de celebrado el nuevo conve-

nio, pero no podría afectar las mejores condiciones de los trabajadores que los hubieran adquirido. El principio que pareciera en cierta forma receptado en el agregado hecho por la comisión al artículo 6° del proyecto, que reforma el artículo 6° de la 14.250, en cuanto se refiere al mantenimiento de las ventajas gozadas efectivamente por el trabajador durante el período existente entre la pérdida de vigencia de un convenio y el establecimiento de un nuevo régimen, en rigor también admite que el nuevo convenio pueda disponer sobre las condiciones de trabajo mas ventajosas alcanzadas por el trabajador.

En este sentido debe tenerse en cuenta que, por ejemplo, en el derecho alemán el convenio colectivo goza de un principio de prioridad respecto del convenio de empresa, admitiéndose que el convenio colectivo sea el que autorice que ciertas reglas sean tratadas por el convenio de empresa. En este caso sí hay articulación y no el desmembramiento de la negociación colectiva que podría generarse mediante la prevalencia del convenio de menor nivel.

En el derecho brasileño, existe un sistema escalonado en tanto y en cuanto los empleados pueden celebrar acuerdos de empresa previa notificación al sindicato de categoría para que en el plazo de ocho días se expida sobre si asume la dirección de las negociaciones. Si rehusara o mantuviera silencio, se debe notificar por otros ocho días a la federación o confederación. Recién agotadas esas instancias, los interesados podrán proseguir directamente las negociaciones.

Sin embargo establece el principio de norma más favorable en el artículo 620 CLT (Consolidación de las Leyes de Trabajo): “Las condiciones establecidas en las convenciones, en tanto más favorables, prevalecerán sobre las estipuladas en acuerdos (de empresa)”.

En definitiva, el régimen propuesto, conduce a restar elementos de negociación a los trabajadores, ya sea mediante una reducción de la protección que brinda el orden público laboral, transitando así la peligrosa cornisa de la inconstitucionalidad (por violación de los artículos 14 y 17, en cuanto al derecho de propiedad; artículo 16, referido a la igualdad, más precisamente en el ámbito laboral, el artículo 14 bis, en cuanto al principio de retribución justa y de igual trabajo, igual salario y el artículo 75 inciso 19, la llamada cláusula del nuevo progreso, artículo 75 inciso 24, en tanto y en cuanto violara los convenios 87 y 98 de la OIT, que en tanto tratados internacionales, tienen jerarquía superior a las leyes); cuanto por la atomización del poder de negociación de sindicatos estructurados a nivel nacional.

El dictamen de comisión conocido avanza sobre la información que deben proporcionar las empresas en el marco de la negociaciones colectivas y en las negociaciones derivadas de los procedimientos de crisis, también incorpora una normativa sobre “balance social”.

El aporte fundamental y que constituye el meollo de la cuestión laboral es el de la policía del trabajo, que ha sido ampliamente tratado en el Título VI del dictamen de comisión.

El aspecto más opinable es el referido a los recursos. En este sentido, las multas y tasas que establece el inciso b) del artículo 33, en tanto establecidas al financiamiento del sistema, no pueden ser asignadas al Programa de Empleo y Formación Profesional de Jóvenes, en tanto éste no forma parte del Sistema Integrado de Inspección. Esto es una contradicción que debe ser aclarada. A mi criterio, no se le deben restar recursos al esfuerzo por controlar en forma efectiva el cumplimiento de las normas laborales.

En este sentido, la directiva del artículo 40 del dictamen pone el acento en ese esfuerzo. Se podría unificar la norma con la relativa a los recursos que prevé el artículo 33, homogeneizando el tratamiento de esta cuestión. En tal sentido se podría establecer en el inciso b): Multas y tasas, especialmente las derivadas de la infracción a las leyes 18.694 y 25.512.

La relativa a la reducción de la afectación, se podría establecer como norma transitoria en el actual artículo 40.

**Sr. Presidente.** — Se van a votar los pedidos de inserción formulados por los señores senadores.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Se procederá en consecuencia.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Han resultado dos tercios de votos por la afirmativa.

**Sr. Menem.** — Debe indicarse el número.

**Sr. Presidente.** — Sobre 59 señores senadores presentes, han resultado dos tercios de votos por la afirmativa.

Corresponde la votación en particular.

—Se enuncia el artículo 1º.

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Sobre 59 señores senadores presentes, resultan dos tercios de votos por la afirmativa.

—Se enuncian los artículos 2º a 5º.

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Sobre 57 señores senadores presentes, resultan dos tercios de votos por la afirmativa.

—Se enuncian los artículos 6º a 23.

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Sobre 56 señores senadores presentes, resultan dos tercios de votos afirmativos.

—Se enuncian los artículos 24 a 27.

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Sobre 57 señores senadores presentes, resultan dos tercios de votos afirmativos.

—Se enuncian los artículos 28 a 34.

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Sobre 58 señores senadores presentes, resultan dos tercios de votos afirmativos.

—El artículo 35 es de forma.

**Sr. Presidente.** — Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Cámara de Diputados.

Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

—Son las 21 y 33.

ADOLFO H. MADAMA

Subdirector a/c del Cuerpo de Taquígrafos.